CASO FAMILIA BARRETO- DENUNCIA ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

ÍNDICE

1. PETICIONARIOS Y PRESENTACIÓN DE LA PETICIÓN
2. CONTEXTO
 - 2.1. CONTEXTO REGIONAL DEL CASANARE PARA EL MOMENTO DE LOS HECHOS
 - 2.1.1 CONTEXTO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE PARA EL MOMENTO DE LOS HECHOS
3. PRESENCIA DE GRUPOS DE AUTODEFENSAS EN LA REGIÓN DEL CASANARE
4. HECHOS
5. HECHOS DE TORTURA Y HOMICIDIO DE LA MASACRE A LA FAMILIA BARRETO
 - 5.1 HECHOS DE TORTURA Y HOMICIDIO DE LA FAMILIA BARRETO
 - 5.2 HECHOS SOBRE EL DESPLAZAMIENTO FORZADO Y AMENAZAS A JOSE DANILO BARRETO

5.3 HECHOS DE LAS AFECTACIONES PSÍQUICAS Y AFECTIVAS EN LOS

FAMILIARES (*Hechos*)

6. RECURSOS AGOTADOS – ACTUACIONES JUDICIALES A NIVEL INTERNO

6.1 JUSTICIA ORDINARIA

6.2 JUSTICIA TRANSICIONAL

7. TRAMITE DE REPARACIÓN INDIVIDUAL POR VÍA ADMINISTRATIVA - Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas

8. DERECHOS VULNERADOS Y NORMAS VIOLADAS

8.1 CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

8.2 VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA

8.3 VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PERSONAL

8.4 VIOLACIÓN DEL DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES

8.5 VIOLACIÓN DEL DERECHO DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y A LA INTEGRIDAD DE LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS (ART. 17 CADH)

8.6 VIOLACIÓN AL DERECHO DE PROTECCIÓN JUDICIAL (ART. 25 CADH)

8.7 VIOLACIÓN AL DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY

8.8 VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

8.9 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA

9. OBLIGACIÓN GENERAL DE INVESTIGAR LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS A LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD

10. REPARACIONES

11.PRUEBAS

12.OBJETO DE LA DEMANDA

13.DATOS DE LOS DENUNCIANTES

CASO MASACRE FAMILIA BARRETO

Bogotá, diciembre del 2018

Doctor

Paulo Abrão

Secretario Ejecutivo

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

1889 F Street, NW

Washington, D.C. 20006

Ref.: CASO **MASACRE FAMILIA BARRETO Vs. Colombia**

Respetado Sr. Secretario:

1. PETICIONARIOS Y PRESENTACIÓN DE LA PETICIÓN

ANDREA SOLANGIE TORRES BAUTISTA, Abogada, y CARLOS RODRÍGUEZ MEJÍA, abogado y Representante del Consultorio Jurídico Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Institución de Educación Superior, sin ánimo de lucro, reconocida por el Estado Colombiano mediante Resolución 3645 del 06 de agosto de 1965 expedida por el Ministerio de Justicia, actuando, en representación del Sr. **JOSÉ DANILO BARRETO TORRES**, según poder

conferido, de conformidad con lo previsto en los artículos 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención o CADH) y 23 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CIDH o la Comisión), el cual se anexa a esta petición, de manera respetuosa nos permitimos relacionar los hechos que se concretan en graves violaciones a los derechos humanos de las siguientes víctimas:

- DOLORES TORRES Vda. DE BARRETO
- CIRO ANTONIO BARRETO TORRES 18 años
- ORLANDO BARRETO TORRES
- GLADYS ENYRA RODRÍGUEZ VARGAS 17 años
- NINA RODRÍGUEZ VARGAS
- FLOR MARÍA VACCA 15 años
- FLEDIS ENIRA BARRETO RODRÍGUEZ
- HEIBER ARIAS TORRES 7 años
- ARAMINTA ROA BARAHONA 14 años
- MELQUESIDEC BARRETO TORRES
- ELEDISENIRA BARRETO RODRIGUEZ año y medio

2. CONTEXTO

2.1 CONTEXTO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE PARA EL MOMENTO DE LOS HECHOS

El departamento cuenta con una población total de 282.452 personas, de las cuales 192.752 habitan en zonas urbanas y las restantes 85.700 lo hacen en zonas rurales ¹

3. PRESENCIA DE GRUPOS DE AUTODEFENSAS EN LA REGIÓN DEL CASANARE

Aun cuando la economía del departamento bien puede calificarse de boyante, gracias a los importantes rubros recibidos por las regalías petroleras ², el 26.1% del total de hogares de la población urbana tiene necesidades básicas insatisfechas, al igual que el 57.6% de la totalidad de hogares de la población rural. Sin lugar a duda, la dinámica histórica y reciente de la confrontación armada en el departamento de Casanare está estrechamente relacionada con la economía petrolera, la situación del oleoducto y su geografía³.

En el marco de la confrontación armada han concurrido a lo largo de la historia de este municipio todos los grupos al margen de la ley, quienes han ejercido el dominio y control de la región en distintas épocas:

¹ Resultados Censo 2005. Departamento Nacional de Estadística –Dane

² Por la producción de crudo durante el mes de julio de 2007, el departamento de Casanare recibió por concepto de regalías un total de 56.420 millones de pesos. Ver: <http://web.presidencia.gov.co/sp/2007/septiembre/11/11112007.html>

³ Los Derechos Humanos en el departamento de Casanare. Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Vicepresidencia de la República.

En cuanto a los grupos de autodefensa, debe decirse que el origen de la presencia de estas organizaciones armadas en el departamento de Casanare está directamente relacionado con la inmigración de personas provenientes de las zonas esmeraldíferas del departamento de Boyacá, las cuales contaban con una larga tradición de conformación de grupos de justicia privada. Sobre este particular, hay que tener en cuenta que la región del Guavio en Cundinamarca, en la que son tradicionales las explotaciones esmeraldíferas, tiene un corredor natural que desemboca en los municipios de Monterrey y Aguazul en Casanare, lo que contribuyó al hecho de que estas zonas recibieran importantes flujos de capital y de personas provenientes de las regiones esmeraldíferas de Boyacá. Es así como personajes como Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mejicano, Víctor Carranza, Víctor Feliciano y Héctor Buitrago adquirieron extensas propiedades en los departamentos de Meta y Casanare, situación que fue determinante en la conformación de estructuras de autodefensa en esos dos departamentos”⁴. Dichos grupos de Autodefensa se denominaron en ese momento: CONTRAGUERRILLA LLANERA, MACETOS, GACHAS, CARRANCEROS, BUITRAGUEÑOS, MÁS SERPIENTE NEGRA y otros, todos ellos de línea puramente paramilitar.

Su área de injerencia:

- Departamento de Boyacá: en las provincias del Oriente, (Guateque, Chivor, Guayata, Somondoco, Tenza, Sutatenza, La Capilla), Neira (Garagoa, Chinavita, Pachavita, Macanal, Santa María y San Luis de Gaceno), Lengupa (Miraflores, Páez, Campohermoso, San Eduardo, Berbeo, Zetaquirá).
- Departamento de Casanare: en los Municipios de Tauramena, Monterrey, Villanueva.

⁴ (...)“DIAGNOSTICO DEPARTAMENTAL CASANARE” (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la Republica <http://www.derechoshumanos.gov.co>

-
- Departamento del Meta: en los Municipios de Puerto López, Puerto Gaitán, San Martín.

4. ANTECEDENTES DEL SURGIMIENTO, PERMANENCIA Y CONTROL DE GRUPOS PARAMILITARES EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE.

Las denominadas Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) surgen como un grupo armado contrainsurgente, es decir como un grupo de autodefensa interesado en combatir y enfrentar a los grupos guerrilleros que operaban en Casanare, de sus cabecillas degeneraron en un grupo armado que procuraba sostener el negocio del narcotráfico, lograr mantener corredores de movilidad para estos fines, despojar de sus tierras y haciendas a muchas personas de la región y obtener participación económica derivada de la contratación pública de la gobernación departamental y de varias alcaldías municipales. El accionar de las ACC permeó y penetró todas las esferas de la sociedad en ese departamento, de tal manera que autoridades administrativas, políticas, militares, policiales y judiciales no escaparon a su influencia.

Durante los años 2003 y 2004 se desató un cruento enfrentamiento entre las ACC y el bloque llamado Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), motivado en que las primeras rechazaron el aval que desde las AUC iba a dársele a todos los grupos de autodefensas del país con la aplicación de la renombrada ley de Justicia y Paz (Ley 975/05), con el argumento de que las AUC se constituían en un proyecto político del narcotráfico. Esto dio lugar a la disputa de los dos grupos por el control territorial, administrativo y político del Casanare, generando graves violaciones de derechos humanos homicidios, torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, etc. En esos años

investigaciones periodísticas retrataron la situación de derechos humanos en la zona de los hechos así:

[...] Fueron pocos los puestos políticos donde no metió la mano: gobernadores, alcaldes, concejales aceptaron pactos, dinero o fueron intimidados. La lista de condenados, investigados o salpicados es larga. Casi todos los gobernadores o candidatos a serlo quedaron en entredicho por su cercanía a este bloque paramilitar, entre ellos, Edilberto Castro, Eusser Rondón (qepd), Nebio Echeverry, José Alberto Pérez, Miguel Ángel Pérez, Óscar de Jesús López Cadavid y William Pérez Esquivel.⁵

La Autodefensas Campesinas del Casanare no se desmovilizan con la Ley 975, por lo tanto, sus delitos son objeto de investigación de la Justicia Ordinaria, aun así, los miembros de este grupo han mantenido un pacto de silencio desde las más altas esferas en casos como el de la Familia Barreto, esperando obtener beneficios de la justicia transicional.

5. HECHOS

5.1 HECHOS DE TORTURA Y HOMICIDIO DE LA LA FAMILIA BARRETO

- a) El 03 de octubre de 1990, alrededor de la 9:00 pm en la Vereda Banco del Oso, finca “La Palma”, jurisdicción de Tauramena – Casanare, donde residía la Familia Barreto; se presentaron cinco hombres fuertemente armados y vestidos con prendas militares, quienes se identificaron como miembros del grupo paramilitar Autodefensas Campesinas del Casanare creado por FRANCISCO FELICIANO y HÉCTOR BUITRAGO.

⁵ (<http://www.semana.com/nacion/articulo/el-senor-guerra/61379-3>)

b) Estos hombres sindicaban a la Familia Barreto de ser colaboradores de la guerrilla, en la casa se encontraban diez (10) miembros de la familia Barreto, entre ellos seis (6) menores de edad.

c) Los hombres amarraron y amordazaron a toda la familia y a cada uno de ellos le infligieron torturas y tratos crueles, les dispararon en ráfaga uno a uno frente al otro de manera que pudieran ver como padecía cada miembro de la familia, todo esto hasta causarles la muerte. Solo uno de ellos, el Sr. JOSÉ DANILO BARRETO TORRES quien actúa como peticionario, aprovechando la sevicia del actuar de los autores, quienes se tomaron todo el tiempo para torturar a la familia, logró zafar sus ataduras y huir.

d) Es el Señor JOSÉ DANILO BARRETO TORRES, acude a las autoridades para reportar lo ocurrido, sin embargo, recibe respuesta negativa de las mismas, por supuesto temor al orden público y por considerar muy alejada la zona.

e) Ante la falta de presencia de las autoridades en el lugar de los hechos, es el propio JOSÉ DANILO quien decide levantar los cadáveres de sus seres queridos, ante la amenaza inminente de los autores de desaparecerlos, para lo cual hace uso de una camioneta prestada por la alcaldía, dado que los funcionarios no se atrevieron a acompañarle, razón por la cual el Sr. JOSÉ DANILO BARRETO, junto con otro familiar se dirige a la Finca “La Palma”, donde recupera los cadáveres que lamentablemente y por el paso de las horas ya estaban siendo comidos por los cerdos.

f) El peticionario JOSÉ DANILO BARRETO, se dirige al Juzgado de Monterrey con los cuerpos de sus familiares y allí, el 04 de octubre de 1990 la Juez Primera Promiscua Municipal de Monterrey Dra. NUBIA MARÍA PÉREZ PINTO, junto con el medico director del centro de salud Dr. OSCAR MARTÍNEZ y la Secretaria del Juzgado Sra. ZORAIDA BARRETO,

adelantan diligencia de levantamiento de cadáver sobre 10 cuerpos de personas fallecidas en la masacre.

g) En el acta emanada de la diligencia que se anexa como prueba a esta petición, se refiere: “***debido a la inseguridad, distancia y por ser de jurisdicción de Tauramena no se trasladan al lugar donde ocurrieron los hechos***”. Los cuerpos se levantan con visibles señales de tortura, como se evidencia en el ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER, que se transcribe a continuación:

“En Monterrey Casanare a los cuatro días del mes de octubre de mil novecientos noventa, la suscrita Juez Promiscuo Municipal de la localidad tuvo conocimiento que, en el municipio de Tauramena Vereda Banco del Oso, desconocidos habían dado muerte a diez personas. Ante la inseguridad y la distancia y además por corresponder a jurisdicción Tauramena, la suscrita no se trasladó al lugar de los hechos, pero a la hora de las 2 de la tarde los familiares de las víctimas informaron que los cadáveres habían sido trasladados a este lugar sin que ninguna autoridad, hasta el momento hubiera practicado la diligencia de levantamiento. La suscrita funcionaria en asocio de su secretaria y el médico director del Centro de Salud de esta localidad, Dr. OSCAR MARTÍNEZ, a quien se le solicitó la colaboración para el examen minucioso de los cadáveres, no trasladó al denominado “Salón Comunal” con el fin de practicar el levantamiento de los cadáveres. Una vez allí, en un vehículo se observó varios ataúdes de donde fueron bajados uno a uno para el reconocimiento y examen sobre las huellas de violencia que éstas presentan: En un primer cajón se halló una persona de sexo femenino de aproximadamente 50 años, rigidez cadavérica, brazos encogidos sobre el pecho y con las siguientes señales de violencia: Cabeza, destrucción hemicara y hemicráneo izquierdo con exposición de masa cefálica;

cuello herida de 6x6 irregular, región cervical derecha herida de cinco centímetros aprox.; herida en muñeca izquierda, herida en hipocondrio derecho de más o menos 15x15 cms. Con exposición del intestino delgado; miembros inferiores herida 6x4 tercio superior cara anterior muslo derecho con fractura del fémur del mismo lado, destrucción de tejidos blandos; herida de 5x5 tercio medio, muslo izquierdo; destrucción de tejidos blandos; herida de 11x5 cms en tercio inferior pierna izquierda con destrucción de tejidos blandos y fractura tibia y peroné, herida en antipie izquierdo con amputación del segundo dedo, múltiples fracturas de tarso y metatarso; herida de 3x2 cms irregular en región escapular derecha. Se estableció por los familiares que este cadáver respondía al nombre de DOLORES TORRES VDA. DE BARRETO. Un segundo cajón donde se halla el cadáver de quien en vida se llamó CIRO ANTONIO BARRETO TORRES, de aproximadamente 18 años de edad, de posición cúbito dorsal, rigidez cadavérica, pies en posición normal, brazos semi encogidos y presenta las siguientes señales de violencia: herida de 8x3 en región frontal con destrucción de tejidos óseos y tejidos blandos; orificio de cuatro milímetros a un cm de la oreja derecha en sentido postero-anterior; herida de 3x3 codo izquierdo destrucción de articulación del codo; herida de 8x4 cms. En tercio superior, cara posterior antebrazo derecho con destrucción ósea; herida de 8x10 cms. en hipocondrio izquierdo con exposición de vísceras huecas y parte del brazo. Un tercer cajón donde se halló en posición cúbito dorsal a quien en vida correspondía al nombre de ORLANDO BARRETO TORRES, de aproximadamente 16 años, rigidez cadavérica, pies en posición normal, miembros inferiores en posición normal, miembros superiores en aducción y presenta las siguientes heridas: herida de 4 cms. en región escapular derecha con línea clavicular media, herida de 4 cms en región lumbar derecha 3 cms de línea vertebral; destrucción de hemicara hemicuello derecho y hemicránea; herida de 6x3 cms en

hipocondrio derecho; herida de 4x5 cms en cara anterior ojo derecho; herida de 2x2 cms flanco izquierdo; herida de 3x3 cms en tercio inferior, cara anterior, muslo izquierdo con destrucción de fémur y tejidos blandos. Fue bajado un cuarto ataúd donde se encontró en posición cúbito dorsal, con rigidez, miembros inferiores en posición normal, brazos semientrecogidos, de 17 años de edad aproximadamente, de sexo femenino, los presentes manifestaron que se trata de GLADYS ENIRA RODRÍGUEZ VARGAS quien presenta una herida de 6x6 cms con hemitorax izquierdo entre 4 y 6 espacio intercostal; herida de 7y 5 cms lineales en brazo izquierdo; herida de 3x3 dorso y cara palmar mano derecha entre el 5º y el 4º dedo. Junto a este cadáver se halló también el cadáver de un menor de dos meses de edad aproximadamente de sexo femenino NN, hija de GLADYS ENIRA RODRÍGUEZ Y MELQUESIDEC BARRETO quien se hallaba en posición cúbito dorsal, miembros inferiores en posición normal y con los siguientes signos de violencia: amputación de cabeza y miembro superior derecho, y herida de 4 milímetros a nivel de más o menos séptima vértebra dorsal lado izquierdo. El quinto ataúd contenía el cadáver de FLOR MARÍA VACCA de aproximadamente 15 años de edad, con rigidez cadavérica de aproximadamente 15 años de edad, con rigidez cadavérica, en posición cúbito dorsal miembros inferiores en posición normal, miembros superiores en aducción, con las siguientes señales de violencia: destrucción total hemicráneo izquierdo y cara facciones irreconocibles; herida de 3x3 en fosa iliaca izquierda con exposición de vísceras huecas, herida de 3x4 en tercio superior cara anterior pierna derecha; herida de 6x1 en tercio superior cara anterior pierna derecha; fractura tibia y peroné, exposición ósea; herida de 3x2 en tercio superior pierna izquierda. Seguidamente fue bajado el cadáver de la menor FLEDIS ENIRA BARRETO RODRÍGUEZ de un año y medio de edad, de sexo femenino, rigidez cadavérica, miembros inferiores en

posición normal, descubierta de la sábana se halló: una herida de 4 cms en región parietal y occipital derecha; destrucción completa de la cara, facciones irreconocibles; herida de 5x6 cms en cara posterior externa; fémur derecho, destrucción tejidos blandos. A continuación fue bajado otro ataúd y en él se halló el cuerpo de quien en vida respondía al nombre de MELQUISEDEC BARRETO TORRES, de aproximadamente 26 años de edad, con rigidez cadavérica, en posición cúbito dorsal, miembros inferiores en posición normal, brazos en aducción y le fueron hallados los siguientes signos de violencia: herida de 4 cms en región lumbar izquierda a 6 cms de línea vertebral; herida de 2x3 irregular en región lumbar derecha; herida de 3x2 en región cervical izquierda; herida de 6x4 a la altura del 7º espacio intercostal derecho con línea axilar interior; herida lineal de 4 cms que penetra cavidad abdominal; herida irregular de 8x9 con exposición de intestino delgado y grueso en flanco izquierdo herida de 6x4 cara anterior codo izquierdo, exposición ósea. El noveno cadáver respondía al nombre de HEIBER ARIAS TORRES, quien una vez descubierto de una sábana se halló rigidez cadavérica, de sexo masculino, de aproximadamente siete años de edad, miembros inferiores en posición normal, superiores en aducción y con las siguientes señales de violencia: herida irregular 15x15 cms en región occipital con destrucción ósea y exposición de masa encefálica; herida irregular de 10x10 en hombro derecho, destrucción de ésta; herida de 4 cms a la altura de 7º espacio intercostal derecho, línea clavicular media; herida de 3x3 en hipocondrio derecho con exposición de vísceras huecas; herida de 5x4 tercio superior, cara anterior, muslo derecho. El décimo cadáver, envuelto en una sábana fue bajado del vehículo y según los familiares correspondía a ARAMINTA ROA BARAHONA, de 14 años aproximadamente, de sexo femenino, rigidez cadavérica miembros inferiores en posición normal, superiores en semiflexión y le fueron hallados los siguientes signos de violencia: herida de 4 cms en región

escapular derecha a cinco cms de la sexta vértebra dorsal; herida de 6x3 cms; herida en región malar derecha, destrucción ósea y tejidos blandos; herido de 4x2 en hombro derecho y destrucción ósea; herida de 8x4 tercio medio, antebrazo derecho, destrucción tejidos blandos; herida de 1,5x1,5 cms en glándula mamaria derecha; heridas en número de dos de 1,5x2 irregular en flanco derecho. Se deja constancia que los diez cadáveres se hallaban totalmente ensangrentados y en sus prendas no se halló ningún objeto ni documento de identidad. Según versión de los familiares los documentos de identidad fueron recogidos por los homicidas. El señor JORGE BOLÍVAR familiar de los occisos fue la persona que trasladó en un vehículo del Municipio, los cadáveres a esta población y entregó a la suscrita funcionaria 42 vainillas, las cuales fueron recogidas en el lugar de los hechos. No siendo otro el objeto de la presente diligencia se firma como aparece por los que en ella intervinieron una vez leída por quienes deben suscribirla.” (Negritas fuera del texto)

h) Como se relaciona en el acta de levantamiento de cadáver, en el lugar fueron halladas también **42 vainillas de fusil** que fueron puestas a disposición de la señora Juez Municipal de Monterrey, Doctora NUBIA MARÍA PÉREZ PINTO.

i) El 05 de octubre de 1990, el director del Centro de Salud Dr. OSCAR GONZALO MARTÍNEZ, practica diligencia de Necropsia a los diez (10) cadáveres, siendo los mismos individualizados como: “DOLORES TORRES Vda. DE BARRETO, CIRO ANTONIO BARRETO TORRES, ORLANDO BARRETO TORRES, GLADYS ENYRA RODRÍGUEZ VARGAS, NINA RODRÍGUEZ VARGAS, FLOR MARÍA VACCA, FLEDIS ENIRA BARRTO RODRÍGUEZ, HEIBER ARIAS TORRES, ARAMINTA ROA BARAHONA Y MELQUESIDEC BARRETO TORRES.

j) El 06 de octubre de 1990 el diario de cobertura nacional “El Tiempo” publicó la noticia: “Cuatro niños y dos Mujeres entre las Víctimas Masacradas 9 personas en Casanare”, donde reseña que el Coronel GUILLERMO ACHURY MARTÍNEZ, jefe de información y prensa del Ejército Nacional, informó en un comunicado los hechos de la Masacre.

k) Atendiendo a que el Sr. JOSÉ DANILO BARRETO no solo fue el testigo principal de la Masacre de su familia, sino también el principal denunciante de los hechos violentos sufridos por la misma, el mismo fue objeto de constantes amenazas contra su vida que terminaron por forzarlo a abandonar la región de Casanare y desplazarse durante años.

5.2 HECHOS sobre el DESPLAZAMIENTO FORZADO y AMENAZAS a JOSE DANILO BARRETO

Atendiendo a que el Sr. JOSE DANILO BARRETO, no solo fue el testigo principal de la Masacre de su familia, sino también el principal denunciante de los hechos violentos sufridos por la misma, el mismo fue objeto de constantes amenazas contra su vida que terminaron por forzarlo a abandonar la región de Casanare y desplazarse forzosamente durante años, lo que implicó además de pérdidas materiales sobre todo un profundo dolor y desarraigo

Amenazas posteriores a la masacre

Luego de los hechos de la Masacre, José Danilo Barreto sufrió reiteradas amenazas. Según los testigos:

“En esos días y luego de los hechos de la Masacre el señor JOSE DANILO se encontraba arando un ganado, cuando llegó un señor con un arma debajo de su poncho amenazándolo (posteriormente en el proceso penal se reconoció a este señor con el nombre de HUMERTO ÁVILA) [...] Debido a lo anterior en varias ocasiones el Sr. DANILO BARRETO recibió serias amenazas contra su vida que lo

*obligaron a salir del Casanare por más de diez años.*⁶ José Danilo Barreto, no sólo fue el testigo principal de la Masacre de su familia, sino también el principal denunciante de los hechos. Las amenazas contra su vida, amenazas por ser testigo y por razón de sus denuncias terminaron por forzarlo a abandonar la región de Casanare y desplazarse forzosamente durante años. Durante su desplazamiento el señor Barreto ha conocido, de distintos episodios en los cuales varios hombres lo han buscado en el pueblo.

Una de las personas que amenaza al Sr. JOSE DANILO, posteriormente, es identificada dentro de la investigación penal derivada por la Masacre de la familia Barreto, como HUMBERTO AVILA, pese a la individualización e identificación plena del sujeto este nunca fue judicializado ni sancionado por las amenazas.

Como consecuencia del Desplazamiento Forzado, JOSE DANILO BARRETO pierde por completo el hilo de la investigación penal derivada por la Masacre de la que fue Víctima su familia, situación que le causa profunda impotencia.

La situación de amenaza que provocó la imposibilidad de conocimiento, información e impulso de la investigación por parte del Señor JOSE DANILO BARRETO implicaron que el proceso se mantuviera por más de 10 años archivado y en absoluta impunidad.

Al Señor JOSE DANILO BARRETO la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas no le reconoció la calidad de víctima respecto al desplazamiento forzado por considerar que el abandono de su tierra

⁶ Fiscalía 31 Derechos humanos. Radicado 8649. Cuaderno Tutela 1, Masacre Barreto.

en las condiciones que lo hizo correspondía a una decisión voluntaria, Con esta decisión se desconoció que la situación de indefensión y riesgo fueron las únicas y reales razones de su huida.

5.3 HECHOS DE LAS AFECTACIONES PSIQUICAS Y AFECTIVAS EN LOS FAMILIARES *(Hechos*

La familia BARRETO siempre fue una familia unida, con intereses en común, un gran sentido de solidaridad y de amor entre ellos, la masacre cometida en contra suya dejó como superviviente a JOSE DANILO, uno de sus integrantes quien ha padecido uno de los más grandes dolores, un hecho que cambió y transformó su vida y que no ha sido superado a pesar de los años.

El señor JOSE DANILO BARRETO, desde el momento de la masacre ha estado afrontando todos los sinsabores, el dolor y todos los problemas que se generan al interior del ser mismo cuando los integrantes de su familia fueron ultimados cruelmente.

Esto implicó un cambio en sus actividades cotidianas para poder sobrevivir a la tortura padecida que perpetua en la memoria a través de los gritos de sus familiares que fueron asesinados uno a uno con disparos indiscriminados.

Además de afrontar todas las actividades a las que ha sido sometido dentro del proceso penal, poniendo de este modo sumido en estados de depresión y de rabia.

Finalmente, JOSE DANILO BARRETO, ha sufrido de manera indescriptible todos los daños causados a su familia en consideración a este hecho, la angustia que invadió el corazón; el dolor que aún siente por sus hermanos, padres y demás familiares del cual él pudo escapar hace que muchas veces la víctima sobreviviente se sienta culpable por el mero hecho de vivir.

Los impactos y daños psicosociales causados por la masacre de su familia tienen características especiales que las pueden diferenciar de otras pérdidas y que deben ser tenidas en cuenta, se generan *“sentimientos de caos, impredecibilidad, desesperanza, desconfianza e indefensión que llevan a la destrucción de las estructuras familiares, del tejido social y de los referentes cultural, ideológico, educativo y político con los que se identifican. Eso no necesariamente se traduce en enfermedad mental, pero siempre implica sufrimiento”*⁷ Ahora bien, fueron diferentes las oportunidades en las cuales JOSE DANILO acudió distintas autoridades aterrorizado huyendo junto con su hermano LIES EDUARDO para sobrevivir y luego para realizar el levantamiento de sus seres queridos.

6. RECURSOS AGOTADOS – ACTUACIONES JUDICIALES A NIVEL INTERNO

6.1 JUSTICIA ORDINARIA

- a) A partir de la Denuncia de los hechos se deriva una investigación penal registrada bajo el No. (1697)3958 de fecha 14 de octubre de 1990.
- b) La investigación inicial es asignada a la fiscalía cuarta especializada adscrita a la dirección Seccional de Santa Rosa de Viterbo, en Contra de TITO JULIO FERNÁNDEZ Alcalde de Monterrey – Casanare y DIEGO YESID SÁNCHEZ Capitán del Ejército quien se desempeñaba como Comandante de la Base Militar de Monterrey para la época de los hechos,

⁷ Corporación Avre, Incorporación de la perspectiva psicosocial en las políticas y programas de atención a las víctimas de la violencia política en Colombia: reflexiones a partir de dos AmicusCuriae de la Corporación Avre ante la Corte Constitucional de Colombia, mimeo, Bogotá, 2012.

por el delito de Homicidio con Fines Terroristas, (Registro No. (1697)3958 de fecha 14 de octubre de 1990).

Como denunciante aparece PEDRO JULIO ARIAS LEAL debido a que JOSÉ DANILO BARRETO para este momento estaba huyendo para mantenerse vivo.

c) SAÚL TORRES GAMBOA, también fue vinculado a la investigación registrada bajo la partida 3958, en razón a que fue reconocido directamente por el Señor JOSÉ DANILO BARRETO TORRES, pues días antes de la Masacre este último se enteró de que SAÚL había lanzado amenazas que consistían en decir que a su hermano MELQUISEDEC (víctima asesinada en la masacre), lo tenían que esperar por el camino hacia el pueblo para matarlo, dichas amenazas las lanzó unos quince días antes de los hechos.

d) JOSÉ DANILO BARRETO TORRES denunció ante las autoridades que sospechaba que SAÚL consiguió armas en la Base Militar, porque allí se la pasaba días antes de los hechos e incluso salía a patrullar con el ejército a la vista de todo el pueblo.

SAÚL TORRES GAMBOA fue objeto de Medida de Aseguramiento, sin embargo, el mes de marzo de 1994 la Fiscalía decretó el cierre de la investigación.

e) El 23 de octubre de 1995, la Unidad Especializada de Terrorismo adscrita a la Dirección Seccional de Fiscalías, Avoca conocimiento de la investigación allegada por reasignación, ordenando la remisión de esta por competencia a la Dirección Regional de Fiscalías de Oriente con sede en la Ciudad de Villavicencio quien terminó avocando conocimiento hasta junio de 1997. Para este momento ya habían transcurrido siete (7) años desde que ocurrieron los hechos, sin que se llevara a los partícipes ante los jueces para establecer sus responsabilidades y sancionarlos de conformidad con la gravedad de los hechos y su grado

de participación en los mismos. Mientras tanto la investigación rodaba de un lado al otro por cuestiones formales que terminaron dejando en último plano la verdad y la justicia.

- f) El 14 de octubre de 1999 la investigación vuelve a ser cambiada de fiscal, esta vez a la ciudad de Yopal- Casanare, esta fiscalía el 26 de diciembre de 2002, sin adelantar absolutamente ninguna actividad, decide proferir Resolución Inhibitoria con base en los siguientes argumentos:

- *...inexplicablemente se ordena continuar con la investigación, para investigar la conducta desplegada por TITO JULIO FERNÁNDEZ y DIEGO YESID SÁNCHEZ, ya que en un informe se aducía ser estos quienes ordenaron el hecho bárbarico que se investigó, sin que transcurridos más de doce años de estar adelantando la investigación se encuentra prueba alguna que conduzca a establecer de manera alguna la existencia de indicio mínimo que conlleve a establecer la responsabilidad de estos en los hechos materia de investigación, y que consecuentemente permitiera abrir instrucción en su contra.*

- *Como se aprecia fácilmente el término legal otorgado para la etapa de investigación previa se encuentra fenecido y la fiscalía instructora por intermedio de los organismos de policía judicial ha procurado los diferentes medios idóneos la consecución de los objetivos y postulados que orientan esta etapa, sin que a la fecha esto haya sido posible. Las causas son de diversa índole y no hace falta entrar a disertar sobre tales eventos.*

- **FUNDAMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA FISCALÍA**

Con el pronunciamiento C-780 del 8 de julio del año anterior, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de un considerable número de artículos del Código de

Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), por vicios de procedimiento, dentro de esas normas se encuentra el artículo 326 que autorizaba a la Fiscal para suspender las investigaciones previas que luego de fenecidos los seis meses otorgados para la individualización de autores, partícipes y responsables del presunto ilícito, no se hubiesen podido lograr esos cometidos.

Con ese fallo se creó un cerco jurídico a las conocidas investigaciones previas contra responsables, cuyas únicas dos soluciones posibles son estas: 1- El prolongar indefinidamente una investigación, sobre la cual no se van a conseguir resultados próximos, y entonces dilatar la agonía de la investigación que a la postre terminara con una prescripción. 2- La segunda, es convertir las normas jurídicas en herramientas que desarrollen una concepción adecuada de lo que se puede entender por estado social de derecho; lo que equivale a decir que las normas y Leyes deben servir y estar en función y para el bienestar del hombre (antropocéntrico) y de la sociedad, sin llegar a vulnerar el orden establecido ni ser un obstáculo a sus propósitos.

En tal entendido, resulta viable dar aplicación a lo previsto en el artículo 317 del C.P.P que refiere que se podrá dictar resolución inhibitoria cuando: "...La acción penal no puede iniciarse" esto es, cuando no se ha identificado o por lo menos individualizado a los autores o responsables del delito, requisito sine qua non para proceder a decretar la apertura de la instrucción.

Ahora bien, aun cuando la investigación previa se esté realizando en contra de responsables- personas aún no determinadas- resulta ilegal y desde todo punto de vista arbitrario y contrario a los fines para los cuales se desarrolla esta etapa

procesal, el permitir que la misma se prolongue indefinidamente en el tiempo, ya que esto generaría un abuso del derecho- desviación de poder- pues se violaría flagrantemente el debido proceso (Artículo 29 C.N), carta de navegación de la investigación y el juzgamiento..

En conclusión, esta fiscalía decide: **“NO ACCIONAR PENALMENTE, dentro de la presente investigación que se adelanta en contra de RESPONSABLES, por el injusto de TERRORISMO, de conformidad a lo argumentado ut supra...”**⁸

- g)* A partir de 2010 el Señor JOSÉ DANILO TORRES, establece contacto con la Abogada ANDREA TORRES adscrita a la Fundación Nydia Erika Bautista Para Los Derechos Humanos, organización de familiares Víctimas y solicita su acompañamiento jurídico, pues deseaba conocer qué había ocurrido con la investigación relacionada con la Masacre de sus familiares
- h)* La Fundación Nydia Erika Bautista elevó múltiples derechos de petición a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas reclamando la protección y el reconocimiento de los derechos de JOSÉ DANILO BARRETO a la Verdad, la Justicia, la Reparación Integral y la sanción disciplinaria de los funcionarios que omitieron su deber de investigar, sin que se lograra obtener respuesta de la suerte, estado y ubicación de la investigación derivada de la denuncia del Señor JOSÉ DANILO BARRETO.

⁸ Investigación Penal Radicado 3958, Folio 329 a 331 Cuaderno No. 2 Contra TITO JULIO FERNÁNDEZ y DIEGO YESID SÁNCHEZ por el Delito de Homicidio con fines Terroristas

-
- i)* De parte de la Fiscalía General de la Nación se evidenció, además, que no se inició absolutamente ninguna investigación por los hechos de desplazamiento forzado que sufrió el Sr. JOSÉ DANILO BARRETO como consecuencia de ser el único testigo sobreviviente y denunciante de la Masacre.
- j)* El 30 de Enero la abogada ANDREA TORRES BAUTISTA adscrita a la Fundación Nydia Erika Bautista Para los Derechos Humanos (FNEB), presenta Acción de Tutela contra la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV) poniendo de presente la situación de absoluta impunidad en que se encontraba el caso después de 22 años de ocurridos los hechos y dado que se trataba de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad ejecutados con sevicia contra una familia humilde, campesina de la cual seis(6) de sus miembros eran menores y dos (2) Mujeres
- k)* Durante el trámite de la acción de Tutela, el 13 de febrero de 2012 la Fiscal General de la Nación de la época Dra. VIVIAN MORALES, emite Resolución No. 00263 por medio del cual varía la asignación de la investigación.

“(…) CONSIDERANDO

(…) Que la jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante oficio 000375 fechado 8 de febrero de 2012, solicitó la variación de asignación de la investigación radicada bajo el número 114922 adelantada por la Fiscalía 6ª Delegada ante los Juzgados Especializados de Yopal –Casanare con ocasión de homicidio de Dolores Torres de Barreto, Ciro Antonio Barreto Torres, Orlando Barreto Torres, Gladys Enira Rodríguez Vargas, Nina Rodríguez Vargas, Flor María Vacca, Fledis Enira Rodríguez, Heiber Arias Torres, Araminta Roa Barahona y Melquisedec Barreto Torres, en hechos acaecidos el 4 de octubre de 1990 en la vereda del Banco de Oso, municipio de Tauramena-

*Casanare. Así mismo, designar como fiscal de apoyo en caso de ausencia temporal de titular, al Fiscal Especializado siguiente en la lista. El jefe de la Unidad Nacional fundamenta la petición en **el requerimiento de la FUNDACIÓN NYDIA ERIKA BAUTISTA y la inspección que el Fiscal 88 Especializado de la misma, realizo al referido expediente.** (...)*

RESUELVE

Artículo Primero: VARIAR LA ASIGNACIÓN de la investigación radicada con el numero 114922 adelantada por la fiscalía 6ª delegada ante los juzgados Especializados de Yopal – Casanare. (Negritas fuera del texto)

- l)* El 03 de abril de 2012, la jefe de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación Dra. MARLENE BARBOSA SEDANO, mediante Oficio No. UNDH.DIH 001181 responde a la Dra. ANDREA TORRES que con base en su solicitud se asigna la investigación a la Fiscalía 31 Especializada adscrita a esa unidad con sede en la ciudad de Villavicencio bajo el Radicado 8649.
- m)* Durante todo el mes de marzo de 2012 la Fiscalía 31 de la Unidad de Derechos Humanos y DIH de Villavicencio - Meta, libró varias órdenes de trabajo y escuchó en declaración sobre los hechos a varias personas.
- n)* El 04 de mayo de 2012 la Fiscalía 31 de la Unidad de Derechos Humanos y DIH de Villavicencio - Meta, decreta la apertura de la Investigación atendiendo a que contaba con elementos probatorios suficientes para proceder.
- o)* El 21 de septiembre de 2012, la Fiscalía 31 de la Unidad de Derechos Humanos y DIH de Villavicencio - Meta, realiza diligencia de Indagatoria a HÉCTOR GERMÁN BUITRAGO RODRÍGUEZ Alias EL VIEJO o TRIPAS, fundador y jefe máximo del grupo paramilitar

AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL CASANARE para la época de los hechos. Alias EL VIEJO no acepta su responsabilidad.

p) El 17 de abril de 2013, la Fiscalía 31 de la Unidad de Derechos Humanos y DIH de Villavicencio - Meta, realiza diligencia de Ampliación de Indagatoria a HÉCTOR GERMÁN BUITRAGO RODRÍGUEZ Alias EL VIEJO o TRIPAS, fundador y jefe máximo del grupo paramilitar AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL CASANARE para la época de los hechos. Alias EL VIEJO **se declara inocente.**

q) El 30 de Abril de 2014, la Fiscalía 31 de la Unidad de Derechos Humanos y DIH de Villavicencio - Meta, realiza diligencia de Formulación de Cargos a HÉCTOR GERMÁN BUITRAGO RODRÍGUEZ Alias EL VIEJO o TRIPAS, por los delitos de Homicidio agravado por la sevicia, colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad y aprovechándose de esta situación y con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas en concurso con el delito de Desplazamiento Forzado en calidad de coautor.

r) A partir de la Formulación de Cargos hecha a HÉCTOR GERMÁN BUITRAGO RODRÍGUEZ Alias EL VIEJO o TRIPAS, el expediente es remitido por competencia al Juzgado Único Especializado de Yopal, donde permanece sin resolverse de fondo la condena o absolución de Alias EL VIEJO o TRIPAS. El juez Dr. IVAN DUEÑAS ha manifestado a la representante de las víctimas, su intención de absolver al acusado, argumentando que las conductas endilgadas al mismo han prescrito.

6.2 JUSTICIA TRANSICIONAL

Pese a que las Autodefensas Campesinas del Casanare, como grupo de autodefensa no fue acogido en el marco de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975/05), en atención a que este grupo paramilitar no se desmovilizó, por ser uno de los grupos disidentes al momento de la negociación con el gobierno nacional, algunos de sus miembros se desmovilizaron con el grupo paramilitar conocido como los CENTAuros, como es el caso de JOSÉ REINALDO CÁRDENAS VARGAS Alias COPLERO.

A partir de la determinación de las Autodefensas Campesinas del Casanare de no acogerse a la desmovilización, sus miembros fueron siendo capturados y se encuentran privados de la libertad en las principales cárceles del país, sin embargo, estos delincuentes por no haber sido postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, han manipulado la verdad supeditando su “colaboración” a cambio de beneficios jurídicos. Este grupo tiene todo por decir en lo que se refiere a ubicación de desaparecidos, vínculos con la fuerza pública, las administraciones municipales y locales, las instituciones, y en general toda la verdad sobre los atroces hechos que cometieron en la región del Casanare y Boyacá que fue donde se asentaron.

Sobre el caso particular de la Masacre de la Familia Barreto, la abogada de la Fundación Nydia Erika Bautista Andrea Torres, durante el proceso de búsqueda de la investigación derivada de estos hechos, dirigió varios oficios y Derechos de Petición ante distintas instancias de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación, solicitando entre otras cosas la realización de versiones libres con personas que a través de otros grupos paramilitares las cuales, aunque perteneciendo a las Autodefensas Campesinas del Casanare, se hubiesen desmovilizado con esos otros grupos y pudieran aportar información sobre las actividades delincuenciales de las ya mencionadas Autodefensas Campesinas del Casanare.

El 16 de diciembre de 2010 en diligencia de Versión Libre ante el despacho 16 de Justicia y Paz, el postulado JOSÉ REYNALDO CÁRDENAS VARGAS Alias COPLERO manifestó que la Masacre de la Familia Barreto fue un hecho de responsabilidad de la Organización Autodefensas Campesinas del Casanare, pero que el mismo no era atribuible a él, ni a ninguno de los que estaban presentes en la Versión Libre en ese momento.

El desmovilizado Alias COPLERO refiere textualmente:

“YO TENIA 11 AÑOS, DONDE DESPUÉS LO QUE ELLOS COMENTAN QUE ESCUCHARON QUE LA ACC FUE LA QUE COMETIÓ LOS HECHOS, GAVILÁN COADYUVA QUE LOS QUE TUVIERON QUE VER FUERON VÁLMER PARRA, COLACHO, CARRACO, CUQUI ESTOS ESTÁN MUERTOS Y JAIME MATIZ BENÍTEZ, COMANDANTE PARA ESA ÉPOCA, CHIRIGUARO PRIMO DE CUQUI ALQUIMEDES PÉREZ PARRA ALIAS GAVILÁN APOYA LO QUE ESTOY DICIENDO QUE AL PARECER FUE PROBLEMA DE FAMILIA O VENGANZA DE FAMILIA DE ALIAS PISTOLETE LUIS VEUN ÁLVAREZ

SALA: ¿RECONOCE QUE FUE UN HECHO DE LAS ACC?

POSTULADO: TENEMOS CONOCIMIENTO POR COMENTARIO QUE FUE HECHO DE LA ORGANIZACIÓN, PERO NO DE LOS AQUÍ PRESENTES”⁹

7. TRAMITE DE REPARACIÓN INDIVIDUAL POR VÍA ADMINISTRATIVA -

Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas

⁹ Oficio No. 807 UNJYP-D-16 Bogotá 23 de diciembre de 2010 de la Fiscal 16 delegada ante el Tribunal de Justicia y Paz Dra. LILIANA PATRICIA DONADO SIERRA (Se ha respetado la ortografía y letra del escrito original)

En el marco de la representación judicial de JOSÉ DANILO BARRETO se indagó con las entidades si el Señor JOSÉ DANILO BARRETO o alguna de las víctimas de la Masacre había sido objeto de alguna medida de reparación, evidenciando que ACCIÓN SOCIAL había negado la calidad de Víctima a JOSÉ DANILO BARRETO, argumentando que no podía establecer la veracidad de los hechos, razón por la cual se instaura Acción de Tutela en contra de la UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS quien asumió las funciones del extinto ACCIÓN SOCIAL.

En el marco de esta acción de tutela el 07 de marzo de 2012, el Juez Segundo Penal del Circuito especializado de Descongestión de la ciudad de Bogotá, resolvió Tutelar el Derecho de Petición a JOSÉ DANILO BARRETO TORRES y en consecuencia ordenar a la Directora de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas en el término de 48 horas resolver las solicitudes de JOSÉ DANILO BARRETO.

En respuesta al fallo de Tutela la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas reconoció al Señor JOSÉ DANILO BARRETO su calidad de víctima, por la Masacre de sus familiares y en consecuencia en el año 2012 recibió la medida de indemnización que contemplaba el Decreto 1290.

Del mismo modo al evidenciarse que el Señor JOSÉ DANILO BARRETO, no había declarado los hechos victimizantes sufridos por él directamente con ocasión a la Masacre como fueron el Desplazamiento Forzado, las amenazas y el despojo de sus tierras, JOSÉ DANILO BARRETO declaró ante el Ministerio público en el año 2012 y fue incluido en el Registro Único de Víctimas por el hecho victimizante del Desplazamiento Forzado, recibiendo indemnización por el homicidio de sus familiares.

Aún se encuentra pendiente la materialización de las demás medidas que concretan la Reparación Integral, como son las medidas de satisfacción, restitución, rehabilitación y garantías de no repetición que sin verdad ni justicia no se hacen posibles.

8. DERECHOS VULNERADOS Y NORMAS VIOLADAS

8.1 CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Tal como se desprende de los hechos, el Estado colombiano ha vulnerado en el presente caso los derechos consagrados en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos), 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 25 (Protección Judicial) y 19 a la (protección de la familia) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

8.1.1 VIOLACIÓN A LAS OBLIGACIONES GENERALES ARTÍCULO 1.1. Y 2 DE LA CADH

Antes de comenzar a puntualizar respecto a los derechos sustanciales violados por la actuación del Estado colombiano en contra de la familia Barreto, es fundamental analizar a la luz de las relevantes obligaciones generales de Respetar los Derechos y Libertades (Artículo 1.1 CADH) y el Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno (Artículo 2 CADH) como el estado colombiano a través de

su falta de diligencia, omisión de acción y tolerancia y apoyo a estos grupos en el caso de la masacre de la Familia Barreto, vulneró estas obligaciones y deberes generales.

En dicho sentido, cabe resaltar en primera medida que la Obligación de Respetar los Derechos se encuentra consagrada en el Artículo 1 de la Convención Interamericana de la siguiente manera: “1. *Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.*” (Organización de los Estados Americanos, 1969). Esta disposición es de fundamental relevancia, tanto así que es la base a partir de la cual se desarrollan y desglosan los derechos consignados, reconocidos y protegidos por

la CADH, tanto así, que varios doctrinantes han señalado su relevancia a partir del desarrollo jurisprudencial de la Corte incluso desde sus inicios, en la siguiente medida. “*El artículo 1º de la CADH es la piedra angular sobre la cual descansa el sistema de derechos y libertades de dicho instrumento y, en gran medida, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. La obligación de los Estados Parte del Pacto de San José de “respetar” los derechos y libertades ahí contenidos y “garantizar” su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción “sin discriminación alguna”, permea en el objeto y fin del tratado y, consecuentemente, en el entendimiento que deben tener todos los operadores jurídicos (nacionales e internacionales) para lograr la plena efectividad de los derechos y libertades que contiene.*”

(...)

Desde el inicio de su jurisprudencia la Corte IDH ha abordado, con especial cuidado, lo relativo a la “obligación” de cumplimiento de los derechos humanos. En su primera sentencia sobre el fondo, en el Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (1988), sostuvo que el artículo 1.1 del Pacto de San José es fundamental para determinar si una violación de los derechos humanos reconocidos por la Convención Americana puede ser atribuida a un Estado; y especificó la existencia de dos obligaciones generales en materia de derecho internacional de los derechos humanos que se derivan de lo dispuesto por dicho precepto: la obligación de “respetar” y la obligación de “garantizar” los derechos.

(...)

La obligación de garantía implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.” (Ferrer Mac-Gregor & Pelayo Moller, 2014)

En tal sentido es a la luz de los hechos anteriormente presentados, incluyendo la descripción contextual de la que deviene la ocurrencia de los mismos, es claro que para el caso de la masacre de la familia Barreto se presentó una violación o incumplimiento de esta obligación pues fue clara la falta de articulación y organización por parte de las entidades gubernamentales respectivas para darle el trámite adecuado interno a la resolución y tratamiento de esta situación, tanto desde lo judicial como lo es la investigación penal y los demás recursos agotados, como también las reclamaciones entre entidades públicas, incluyendo lo administrativo en trámites ante la denominada ACCIÓN SOCIAL.

Seguidamente, haciendo énfasis en el desconocimiento y violación de los deberes generales por parte de Colombia, es claro el señalar que en virtud a la violación del artículo 1.1 de la CADH, según lo dispuesto en el artículo 2 de la CADH, el cual establece que *“Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.”* (Organización de los Estados Americanos, 1969). Esto en razón a que para la época de ocurrencia de los hechos, fue inefectiva la garantía y respeto de los derechos y libertades reconocidos y protegidos por la CADH a través de la Ley 16 de 1972, pues a pesar de la protección constitucional y legislativa en el aspecto formal, materialmente se vieron desconocidos una serie de derechos fundamentales reconocidos -los cuales serán desarrollados posteriormente-, los cuales a pesar de las actuaciones dentro de la justicia ordinaria, la justicia transicional y los procedimientos administrativo, casi 28 años después aún siguen siendo vulnerados y no satisfechos.

Lo anterior profundizado y en concordancia con lo señalado en este articulado, pues a pesar de las varias acciones constitucionales interpuestas por la apoderada de las víctimas ante las entidades estatales pertinentes, materialmente aún sigue en impunidad este caso y además los derechos de las familiares víctimas, como lo son el Señor JOSÉ DANILO BARRETO y el Señor LIES EDUARDO BARRETO, a la verdad, justicia y reparación siguen siendo desconocidos y vulnerados.

8.2 VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA

Sobre el derecho a la vida, la Convención Americana de Derechos Humanos consagra:

***Artículo 4. 1.** Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.*

5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieran menos de dieciocho años o más de setenta, ni se les aplicará a las mujeres en estado de gravidez

El derecho a la vida de las víctimas en el presente caso fue arrebatado de manera arbitraria y manifiesta a diez de los miembros de la familia BARRETO, que en su mayoría eran menores de edad; la vida además de ser un derecho fundamental representa una condición previa y necesaria para el disfrute de los demás derechos. Este ataque contra la Familia Barreto vulneró la existencia misma de los titulares del derecho y anuló por completo sus posibilidades y expectativas de vida, con todo lo que esto significa en la órbita personal, profesional, familiar, etc.

El artículo 4 de la CADH reconoce el derecho a toda persona a “que se respete su vida” y, en consecuencia, “nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Teniendo en cuenta lo rezado por el artículo, se entiende que el titular del derecho es todo ser humano y por ende el Estado se encuentra obligado a respetar y garantizar el efectivo goce de este derecho, a todo ser humano dentro de su Jurisdicción.

“El derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana por ser el presupuesto esencial para la realización de los demás derechos. Los Estados tienen la obligación de garantizar la

creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. La observancia del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias, no sólo para prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, en general, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propios agentes de seguridad”.¹⁰

Ahora bien, la Corte fue enfática en decir que “el origen de la responsabilidad internacional del Estado se encuentra en actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana, y se genera en forma inmediata con el ilícito internacional atribuido al Estado. Para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la convención no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, el grado interno de culpabilidad, esto es, si la conducta es dolosa o culposa y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios”¹¹

¹⁰ Corte IDH, Sentencia Escué Zapata Vs Colombia. Sentencia de mayo de 2007 Párr. 40).

¹¹. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso 19 Comerciantes vs Colombia. Fondo, reparaciones y Costas. Sentencia del 5 de julio de 2004. Párr., 141.

No obstante, el grado de responsabilidad del Estado es ampliado por la misma Corte en el caso 19 Comerciantes vs Colombia¹², entendiendo así que ésta no solamente se configura por la actuación directa de sus agentes, sino también cuando han sido particulares con el apoyo, tolerancia u omisión del propio Estado. Esto quiere decir que basta observar la tolerancia de los agentes Estatales o la omisión respecto a las violaciones de derechos humanos.

Esta ampliación anteriormente mencionada es descrita y focalizada magistralmente por la Corte en el mismo caso referido cuando dentro de las consideraciones realizadas para resolver, estableció que fue la misma legislación colombiana la que permitió y apoyó la conformación de grupos paramilitares, pues señaló que:

“116. Ha quedado demostrado que en el marco de la lucha contra los grupos guerrilleros, Colombia emitió legislación (supra párr. 84.a) con el propósito de organizar la defensa nacional, para lo cual se requería de “un esfuerzo coordinado de todos los órganos del poder público y de las fuerzas vivas de la Nación” y, al respecto, se estipulaba que “[t]odos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, pod[í]an ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuy[eran] al restablecimiento de la normalidad”.

¹²Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso 19 Comerciantes vs Colombia. s. Sentencia del 5 de julio de 2004. Párr., 84.a “84.a) A partir de la década de los sesenta del siglo XX surgieron en Colombia diversos grupos guerrilleros, por cuya actividad el Estado declaró “turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional” 17. Ante esta situación, el 24 de diciembre de 1965, el Estado emitió el Decreto Legislativo No. 3398 “por el cual se organiza la defensa nacional”, el cual tenía una vigencia transitoria, pero fue adoptado como legislación permanente mediante la Ley 48 de 1968 (con excepción de los artículos 30 y 34). Los artículos 25 y 33 del referido Decreto Legislativo dieron fundamento legal a la creación de “grupos de autodefensa”. En la parte considerativa de esta normativa se indicó que “la acción subversiva que propugnan los grupos extremistas para alterar el orden jurídico, requiere un esfuerzo coordinado de todos los órganos del poder público y de las fuerzas vivas de la Nación” y, al respecto, el referido artículo 25 estipuló que “[t]odos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, pod[í]an ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuy[eran] al restablecimiento de la normalidad”. Asimismo, en el parágrafo 3 del mencionado artículo 33 se dispuso que “[e]l Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas” 18. Los “grupos de autodefensa” se conformaron de manera legal al amparo de las citadas normas, por lo cual contaban con el apoyo de las autoridades estatales”

Asimismo, se dispuso que “[e]l Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas”. Estas normas emitidas en 1965 y 1968 se encontraban vigentes en octubre de 1987, época en la cual ocurrieron los hechos del presente caso.” (Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia, 2004)

Anudado a esta anterior consideración, se debe rescatar lo señalado por la Corte en el caso de 19 Comerciantes vs Colombia, pues es claro como los grupos de autodefensa, los cuales se volvieron grupos delictivos posteriormente, no solo encontraron su sustento legal en diversas normas del ordenamiento jurídico colombiano para a ser creados, luego de su paso a la ilegalidad fueron tardías, ineficientes e inoperantes las respuestas urgentes del estado que se debieron tomar para contrarrestarlas. De este modo se describe en esta sentencia que:

117. Con respecto al referido fundamento legal de los grupos de autodefensa, cabe resaltar lo indicado por el Tribunal Superior Militar en su sentencia de 17 de marzo de 1998, en la cual dejó claro que: [L]os ‘grupos de autodefensa’ se consideraban como de creación legal de acuerdo al contenido de la ley de Defensa Nacional Decreto Legislativo No. 3398 de 1965 (DIC 24) y el cual fue adoptado como legislación permanente por la Ley 48 de 1968, legalidad fundamentada particularmente en el artículo 25 [...], p]ero además, con fundamento en lo consagrado en el párrafo 3º del artículo 33 de la misma Ley de Defensa Nacional”. [...P]or la anterior situación jurídica se consideraba 72 que los ‘grupos de autodefensa’ eran legales [,] circunstancia admitida por las autoridades y por esa razón gozaban de su apoyo.

118. Los “grupos de autodefensa” se conformaron de manera legal al amparo de las citadas normas, por lo cual contaban con el apoyo de las autoridades estatales. El Estado impulsó su creación entre la población civil, con los fines principales de auxiliar a la Fuerza Pública en operaciones antisubversivas y de defenderse de los grupos guerrilleros, es decir, en su concepción inicial no tenían fines delictivos. El Estado les otorgaba permisos para el porte y tenencia de armas, así como apoyo logístico. Sin embargo, muchos “grupos de autodefensa” cambiaron sus objetivos y se convirtieron en grupos de delincuencia, comúnmente llamados “paramilitares”. 119. Según aclaró el Estado durante la audiencia pública (supra párr. 52), “más o menos a partir de a partir de 1985 [...] empieza a hacerse notorio que hay grupos armados ilegales con estos propósitos”, es decir, grupos que cometían “hechos delictivos, las masacres, los asesinatos colectivos”. Asimismo, señaló que ante esto “el Estado vio la necesidad entonces de tomar medidas legislativas para contrarrestar estas nuevas modalidades y es donde empieza entonces la historia legislativa para contrarrestarlas

120. La Corte observa que cuando ocurrieron los hechos del presente caso ya habían transcurrido aproximadamente dos años de tal notoriedad en la transformación de los grupos de autodefensa, creados al amparo estatal, en grupos delictivos. Sin embargo, no fue sino hasta el 27 de enero de 1988 que Colombia empezó a tomar medidas, entre ellas legislativas, para “contrarrestar” las nuevas modalidades delictivas que realizaban tales grupos. En abril de 1989 se emitió el Decreto 0815, mediante el cual se suspendió la vigencia del parágrafo 3 del artículo 33 del Decreto legislativo 3398 de 1965 (supra párr. 84.a), el cual facultaba al Ministerio de Defensa Nacional para autorizar a los particulares el porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.” (Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia, 2004)

Por lo tanto, se considera una obligación fundamental del Estado el haber tomado todas las medidas necesarias para prevenir, investigar, juzgar y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, como también prevenir las ejecuciones extrajudiciales por parte de sus propios agentes de seguridad o por terceros en alianzas o anuencia.

Adicionalmente, además de lo consignado anteriormente, para dotar de más contundencia el argumento sobre el cual el Estado colombiano es responsable de la violación del derecho a la vida, es pertinente precisar que en razón a la falta de protección de sus ciudadanos y la ineffectividad o ausencia del deber de investigar los actos que constituyen violación de este derecho, también se le debe endilgar responsabilidad al estado Colombiano, pues tal como lo señaló anteriormente la CIDH en el Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, donde se encuentran coincidencias tales como el MODUS OPERANDI perpetrado por los autores directos de la masacre, como la actitud y respuesta del estado ante dicho crimen, se violó el derecho a la vida en los siguientes términos:

“El propio modus operandi de los hechos del caso permiten inferir que, antes de ser ejecutadas, las víctimas fueron privadas arbitrariamente de su libertad y objeto de tortura o graves tratos crueles, inhumanos o degradantes. Los signos de tortura y las condiciones en que algunos familiares y testigos encontraron algunos los cadáveres revelan no sólo la atrocidad y barbarie de los hechos, sino también que, en la menos cruel de las situaciones, las víctimas fueron sometidas a graves torturas psicológicas al presenciar las ejecuciones de otras personas y al prever su fatal destino, al verse sometidas a las condiciones de terror ocurridas en Mapiripán entre el 15 y el 20 de julio de 1997.

137. Sería incoherente limitar la determinación de las víctimas a lo establecido en los procesos penales y disciplinarios en este caso, en el cual es precisamente la mayoría de las víctimas las que no han sido identificadas, producto del propio modus operandi de la masacre y de las graves faltas al deber

de protección por parte del Estado (supra párrs. 96.43 a 96.47 y 116 a 123). Esa falta de identificación es, a su vez, uno de los elementos trascendentales para evaluar la falta de efectividad de las investigaciones y procesos internos en el presente caso (infra párrs. 216 a 240). Tal como se desarrolla en las consideraciones sobre los artículos 8 y 25 de la Convención (infra párrs. 195 a 241), una de las condiciones para garantizar efectivamente el derecho a la vida se refleja necesariamente en el deber de investigar las afectaciones a ese derecho. De tal manera, la obligación de investigar los casos de violaciones al derecho a la vida constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal en el presente caso. “ (Caso de la "Masacre de Mapiripán" vs Colombia , 2005)

En este orden de ideas, no se puede perder de vista que el Estado Colombiano es responsable internacionalmente por la violación al Derecho a la Vida de las personas (Familia Barreto), en la medida que no cumplió con sus obligaciones de garantizar y respetar este derecho. Ya sea por los actos u omisiones cometidas por sus propios agentes; o bien por la tolerancia, apoyo u omisión para permitir que terceros (Grupo Paramilitar ACC) hayan arremetido contra la vida de 10 miembros de la familia BARRETO, entre ellos a 6 niños.

Para el caso concreto vale anotar que la violación al derecho a la vida de la familia BARRETO fue consecuencia directa de que el Estado no garantizó las condiciones necesarias para que no se produjera el hecho horroroso. Así como, haber impedido que sus agentes (Batallón del Ejército presente en la región), previnieran el hecho o particulares (Grupo paramilitar ACC) atentaran contra la vida de estas 10 personas.

En este sentido, la salvaguarda del derecho a la vida requiere que se realice una investigación oficial efectiva, obligación que se refuerza cuando hay personas que pierden la vida como resultado del uso de la fuerza por parte de los agentes o terceros tolerados por el Estado. “La prohibición general que tienen los agentes estatales de abstenerse de privar arbitrariamente de la vida a un individuo [...] sería inefectiva en la práctica, si no existiera un procedimiento en el que se revisara la legalidad del uso de la fuerza”¹³ o bien cuándo desde el mismo Estado se toleran estas prácticas generalizadas contra la población civil por parte de terceros.

En este orden de ideas, el derecho a la vida de los 10 miembros de la familia BARRETO, torturados, acusados de ser guerrilleros y masacrados, fue vulnerado por el Estado Colombiano por acción según dan cuenta los hechos de la estrecha relación que las fuerzas militares, específicamente el batallón de la zona tenía con miembros de las autodefensas, el simple hecho de que existiesen grupos paramilitares asumiendo funciones militares, políticas y ejerciendo control territorial, que no fueron combatidos por el Estado en aras de recuperar el orden público, demuestran su aquiescencia.

Pero también por omisión pues ante el conocimiento que tenían las autoridades de la presencia de grupos paramilitares en la zona, no adoptaron ninguna medida preventiva para proteger la vida e integridad de la población civil que se asentaba en el sector donde permanecía este grupo paramilitar, pues cabe resaltar que dicha presencia era de público conocimiento, sin embargo el batallón del ejército de la zona, aun después de ocurridos los hechos y teniendo conocimiento de la ocurrencia y gravedad de los mismos, no hizo presencia en el sector.

¹³ Corte IDH. Caso Hermanos Gómez Vs Perú. Sentencia de 8 de Julio de 2004. Serie C No. 110 párr. 128.

Del mismo modo, el actuar de las autoridades municipales como la Alcaldía de Monterrey a quien se le reportaron los hechos apenas ocurridos, comprometen la responsabilidad del Estado dado que dejan entrever que omitieron su deber de protección y auxilio al momento de los hechos, la negativa del Alcalde de la época de hacer presencia en el lugar de los hechos demuestra la omisión que se refuerza con el hecho de que pese a haber conocido la gravedad de los mismos, la alcaldía no desplegó absolutamente ninguna actividad, tampoco la fiscalía ni el Juzgado de Monterrey, contrario a ello todos al unísono se negaron sistemáticamente a hacer presencia en el lugar de los hechos como era su deber, argumentando problemas de orden público para su traslado y dejando en los hombros del único sobreviviente sus deberes.

8.3 VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PERSONAL

En el presente caso, se configura igualmente una violación al Derecho a la integridad física y personal, teniendo en cuenta que, existen pruebas contundentes que dan cuenta de que la familia Barreto fue objeto de prácticas que afectaron de manera directa su integridad física y personal, por parte de miembros del grupo paramilitar que perpetró la Masacre, presuntamente con el apoyo y colaboración del batallón del ejército presente en la región.

La Convención Americana de Derechos Humanos consagra **el derecho a la integridad** física, psíquica y moral:

Artículo 5. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

La definición de tortura contenida en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que:

Artículo 2. [S]e entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos y mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.”

Artículo 1. Los Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente Convención.

Artículo 6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción.

Los Estados partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad.

Igualmente, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción.

Artículo 3. a. Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.

b. Las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.

- 1.1 En este orden de ideas y ateniéndonos a las definiciones internacionales, en especial con base a lo consagrado en el Artículo 1 de la “Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” de las Naciones Unidas se puede definir el concepto de Tortura así: *"todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos*

que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas".¹⁴ **(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1987)**

¹⁴ Asamblea General de las Naciones Unidas. (26 de Junio de 1987). *Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas*. Recuperado el 4 de Julio de 2018, de <https://www.ohchr.org/sp/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx>

Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia, Serie C. No. 109 (Corte Interamericana de Derechos Humanos 5 de Julio de 2004). Recuperado el 23 de Julio de 2018, de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_109_esp.pdf

Caso de la masacre de Puerto Bello vs Colombia,. Voto Razonado de A.A CANÇADO TRINDADE (Corte Interamericana de Derechos Humanos 31 de Enero de 2006).

Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, 11.383 (Corte Interamericana de Derechos Humanos 26 de Mayo de 2001). Recuperado el 25 de Julio de 2018, de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_77_esp.pdf

Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú, 11.016 (Corte Interamericana de Derechos Humanos 8 de Julio de 2004). Recuperado el 25 de Julio de 2018, de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_110_esp.pdf

CASO MASACRES DE EL MOZOTE Y LUGARES ALEDAÑOS VS. EL SALVADOR (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 25 de 10 de 2012). Recuperado el 13 de Julio de 2018

CASO XIMENES LOPES VS. BRASIL (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 4 de Julio de 2006). Recuperado el 13 de Julio de 2018, de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_149_esp.pdf

Demanda Internacional de la Familia Gelman vs Uruguay, 12607 (Comisión Interamericana de Derechos Humanos 21 de Enero de 2010).

Familia Barrios Vs. Venezuela, 237 (Corte Interamericana de Derechos Humanos 24 de Noviembre de 2011).

Ferrer Mac-Gregor, E., & Pelayo Moller, C. M. (2014). En F. K. Adanauer, *Programa de Estado de Derecho para Latinoamerica* (págs. 46-49). Bolivia .

Miguel Castro Castro Vs. Perú, 160 (Corte Interamericana de Derechos Humanos 25 de Noviewmbre de 2006). Recuperado el 16 de Julio de 2018

Organización de los Estados Americanos. (22 de Noviembre de 1969). *CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José)*. Obtenido de

Esta conceptualización de la tortura posee varios elementos:

1. El elemento material: son los dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales.
2. La finalidad: es la intención con que se practican los dolores o sufrimientos, ya que los diversos tratados internacionales hacen mención a la finalidad que se persigue con la práctica de estos actos.
3. Calificación del victimario: se aplica el concepto de funcionario público en sentido amplio, entendiendo que pueden ser particulares con la aquiescencia, tolerancia u omisión del Estado.

Otros tratos crueles inhumanos o degradantes.

Se pueden definir como todo acto realizado por agentes del Estado u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia, destinado a producir en una persona, más que el dolor físico, sentimientos de miedo, angustia, inferioridad, humillación, envilecimiento o quiebre de su resistencia física o moral.

Teniendo en cuenta lo anterior ha sido la Corte enfática en sostener que *“la infracción a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tienen diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes,*

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm

Ramírez, L. M. (8 de Mayo de 2014). La obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos en contextos de justicia transicional. (U. Toulouse, Ed.) *Estudios Socio-Jurídicos*, 16(2), 23-60. doi:10.12804/esj16.02.2014.01

cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta”¹⁵.

En este sentido, se puede establecer que los miembros de la familia BARRETO no solo fueron asesinados de manera arbitraria, sino que previamente fueron objeto de Torturas que se materializaron con las acusaciones fundadas en la estigmatización (cuando fueron acusados de ser guerrilleros y otras ofensas); de terror (al ver que hombres fuertemente armados les apuntaban, los amarraban y los tumbaban boca abajo); de miedo (mientras pasaban los minutos y no sabían que suerte les esperaba, pero por sobre todo de profunda angustia al escuchar los disparos a quemarropa contra sus familiares, especialmente contra los niños esperando su turno a ser ultimados); habiendo advertido lo anterior es posible identificar que el grado de afectación a la integridad personal de la Familia BARRETO ostenta lamentablemente el grado de intensidad de tortura. Se debe considerar para el caso que la tortura también existe cuando el ataque se perpetre “con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, **como castigo personal**, como medida preventiva, **como pena o con cualquier otro fin**”¹⁶.

No sobra señalar que “la forma en que son tratadas las víctimas pudieron temer y prever que serían privadas de su vida de manera arbitraria y violenta, configurándose per se tratos crueles, inhumanos y degradantes.

A lo anterior debe sumarse el contexto de sistematicidad y generalidad de hechos de tortura en el

¹⁵ Corte IDH. Caso Familia Barrios Vs Venezuela. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237, párr. 52.

¹⁶ Artículo 2 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST), adoptada por la Asamblea General de la OEA en Cartagena de Indias el 9 de diciembre de 1985,

marco del conflicto armado, ejecutadas por grupos paramilitares como las ACC que implementaron actos de tortura como política militar y estrategia para generar terror, estos actos aunados a la desaparición forzada y las ejecuciones sumarias constituyeron el pan de cada día y fueron cometidos indiscriminadamente contra civiles.

Como relata el Sr. JOSÉ DANILO BARRETO, único sobreviviente, todos los miembros de la familia fueron amarrados de manos y pies, acostados en fila uno al lado del otro, siendo interrogados y acusados de guerrilleros mientras se les apuntaba con fusiles para presionar sus respuestas y que fueron siendo asesinados indiscriminadamente, con disparos de fusil a quema ropa, sin importar si se trataba de mujeres, niños o recién nacidos.

Del Acta de levantamiento de cadáver y la Necropsia, se desprenden claramente las vulneraciones del derecho a la integridad perpetradas contra la Familia Barreto, que dan cuenta de una brutalidad exacerbada de parte de hombres pertenecientes a un grupo armado contrainsurgente que tenía a su favor todo el poder físico, político y territorial y que lo dirigió contra esta familia campesina señalándolos de ser guerrilleros sin serlo.

De las violaciones a la integridad física da bien cuenta la Necropsia así: ¹⁷

“En un primer cajón se halló una persona de sexo femenino de aproximadamente 50 años, rígidos cadáveres brazos encogidos sobre el pecho y con las siguientes señales de violencia cabeza,

¹⁷ Investigación Radicado 8649, Fiscalía 31 Unidad de Derechos Humanos y DIH, Folio 24 Cuaderno 1 (Sic)

destrucción hemicara y hemicránea izquierdo con exposición de masa cefálica, cuello herida de 6x6 irregular región cervical derecha herida de cinco centímetros aprox; herida en muñeca izquierda, herida en hipocondrio derecho de más o menos 15x15 cms con exposición del intestino delgado; miembros inferiores herida de 6x4 cms tercio superior cara anterior muslo derecho con fractura del fémur del mismo lado, desnutrición de tejidos blandos; herida de 5x5 tercio medio, muslo izquierdo, destrucción de tejidos blandos y fractura de tibia y peroné herida en anti pie izquierdo con amputación del segundo dedo, múltiples fracturas de tarso y metatarso, herida de 3x2 cms irregular en región escapular derecha. Se estableció por los familiares que este cadáver respondía al nombre de DOLORES TORRES VDA. DE BARRETO. Un segundo cajón donde se halla el cadáver de quien se llamó CIRO ANTONIO BARRETO TORRES, de aproximadamente 18 años de edad, de posición cúbito dorsal, rigidez cadavérica, pie en posición normal, brazos semi-encogidos y presenta las siguientes señales de violencia herida de 8x3 en región frontal con destrucción de tejidos herida de 9x7 en hemicara izquierda con destrucción de tejidos óseos y tejidos blandos orificio de cuatro milímetros a un cms de la oreja derecha en sentido posterior; herida de 3x3 codo izquierdo destrucción de articulación del codo herido de 8x4 en tercio superior, cara posterior antebrazo derecho con destrucción ósea; herida de 8x10cms en hipocondrio izquierdo con exposición de vísceras huecas y parte del bazo. Un tercer cajón donde se halló en posición cúbito dorsal a quien en vida respondía al nombre de ORLANDO BARRETO TORRES de herida de 6x4 cara anterior codo izquierdo, exposición ósea. El noveno cajón respondía al nombre de HEIDER ARIAS TORRES, quien, una vez descubierto de una sábana se halló rígido cadavérico, de sexo masculino, de aproximadamente siete años de edad, miembros inferiores en posición normal, superiores en aducción y con las siguientes señales de violencia, heridas irregulares de 15x1cms en región occipital en destrucción ósea y exposición de ésta herida de 4cms a la altura de 7º espacio intercostal derecho, línea clavicula media, herida 3x3 en

hipocondrio derecho con exposición de vísceras huecas, heridas de 5x4tercio superior, cara anterior, muelo derecho. El décimo cadáver, envuelto en una sábana fue bajado del vehículo y según los familiares correspondía a ARAMINTA ROA BARAHONA de 14 años aproximadamente, de sexo femenino, rigidez cadavérica miembros inferiores en posición normal, superiores en semi-flexión y le fueron hallados los siguientes signos de violencia: herida de 4cms en región escapular derecha a cinco cms de la sexta vértebra dorsal, herida de 6x3 cms, heridas en región malar derecha, destrucción ósea y tejidos blandos, herida de 4x2 en hombro derecho y destrucción ósea herida de 8x4 tercio medio, antebrazo derecho, destrucción tejidos blandos, herida de 1,5x1,5 cms en glándula mamaria derecha, heridas en número de dos de 1,5x2 irregular en flanco de derecho. Se deja constancia que los diez cadáveres se hallaban totalmente en sangrentados y en sus prendas no se les halló ningún objeto ni documento de identidad, fueron reconocidos por los homicidas. El señor JORGE BOLÍVAR familiar de los occisos fue la persona que traslado en un vehículo del Municipio, los cadáveres a esta población entregaron a la suscrita funcionaria 42 vainillas, las cuales fueron recogidas en el lugar de los hechos. No siendo otro el objeto de la presente diligencia se firma como aparece por lo que en ella intervinieron, una vez leída por quienes deben suscribirla.”

8.4 VIOLACIÓN DEL DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES

Las fallas en la procuración de justicia en casos de graves violaciones de los derechos humanos son un problema estructural y permanente en Colombia y cuando se trata de hechos ocurridos años atrás, la impunidad es absoluta.

Del expediente judicial se deriva que a pesar del testimonio de una de las víctimas sobrevivientes y de contar con indicios que comprometían la presunción de inocencia de personas plenamente identificadas, individualizadas y ubicables, el caso permaneció y permanece permeado por la impunidad, pues hasta el momento nada se ha hecho por confirmar o descartar la responsabilidad de quien fuera el Alcalde del Municipio de Monterrey para la época de los Hechos Sr. TITO JULIO FERNÁNDEZ, quien se negó a prestar apoyo a los familiares para recoger los cadáveres o del Comandante del Ejército adscrito al batallón que operaba en la zona de los Hechos Capitán del Ejército DIEGO YESID SÁNCHEZ, aun cuando dentro de sus testimonios el Sr. JOSÉ DANILO BARRETO, referencio en varias ocasiones como una semana antes el ejército había estado preguntando por cada miembro de su familia y como siendo un sector que normalmente patrullaba el ejército no hizo presencia alguna al momento de la Masacre o después.

Es en razón a esta breve contextualización de algunos hechos que rodearon el Caso de JOSÉ DANILO BARRETO y la masacre a sus familiares cometida en la vereda Banco del Oso, del municipio de Tauramena del departamento del Casanare por parte de miembros del grupo paramilitar denominado “Autodefensas Campesinas del Casanare” (A.C.C), se procede a examinar si dentro de esta actuación es posible reclamar al estado colombiano el haber vulnerado el derecho a recibir oportunamente las garantías judiciales, a la luz de lo que establece el artículo 8.1 de la CADH, el cual reza que:

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (Organización de los Estados Americanos, 1969)

Para el caso del Señor BARRETO, el incumplimiento de este artículo por parte del estado se desglosa básicamente en dos partes. La primera consiste en que se incumplió el deber de garantizar que la persona fuese escuchada dentro de un plazo razonable, pues bajo este entendido es claro que al señor JOSÉ DANILO BARRETO tal como se señaló anteriormente en la parte fáctica motiva de esta denuncia, acudió de manera diligente e inmediata ante las autoridades respectivas, quienes por razones de miedo e incompetencia, faltaron a su deber de direccionar adecuadamente la resolución de esta actuación, tanto en los términos de la actuación penal, como en el establecimiento de su calidad de víctima tanto de tortura como de tentativa de homicidio y posterior desplazamiento forzado por amenazas. Anudado a esto, es claro que el plazo razonable que señala este artículo fue totalmente desconocido en tanto que desde el día siguiente a la ocurrencia de los hechos que materializaron esta masacre, el 4 de octubre de 1990, el Señor BARRETO acudió oportunamente ante el Juzgado Primero Penal Promiscuo de Monterrey Casanare y desde ese entonces hasta este día, no ha recibido resolución alguna por parte de las autoridades judiciales competentes

En segunda medida, e íntimamente relacionado con lo anterior, el artículo 8.1 de la CADH señala que esta actuación debe ser adelantada por una autoridad judicial competente, especializada y con las calidades suficientes para dar trámite al caso. Según esto, se puede evidenciar por relatado que muchas las instancias, instituciones y recursos agotados y requeridos a nivel interno por parte del Señor Barreto para obtener el respeto y garantía a sus derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición como víctima tanto presencial como en calidad de familiar de esta masacre, que se hace evidente la falta de respeto de las garantías judiciales pertinentes y suficiente de la cuales es titular este nacional colombiano.

8.5 VIOLACIÓN DEL DERECHO DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y A LA INTEGRIDAD DE LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS (ART. 17 CADH)

Al realizar una simple lectura del contenido substancial del artículo 17 de la CADH y al compararlo con los hechos, circunstancias y consecuencias de los hechos acaecidos el 3 de octubre de 1990, es claro observar cómo fue vulnerado de manera directa, soez, cruel, inhumana y con sevicia el derecho a la Protección de la Familia.

Esto es claro pues fueron diez los familiares asesinados al Señor José Danilo Barreto, lo que evidentemente interrumpe y flagela el derecho fundamental a la familia, lo que conlleva a una afectación y casi destrucción de un proyecto de vida por parte de los familiares sobrevivientes que pierden no solo a sus seres queridos, sino a su íntima esfera personal en donde encuentra protección, compañía, abrigo y afecto.

Además, se desprende del estudio sobre las violaciones a la integridad personal, que la Corte ha reconocido de manera especial los derechos de los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos. La Corte a través del tiempo ha ampliado la concepción sobre determinadas violaciones de derechos humanos que generan un impacto negativo a los familiares. Es así por ejemplo que el daño a la integridad personal, psíquica y moral de los familiares no solamente resulta vulnerado por el mero hecho de conocer los padecimientos de sus seres queridos, sino que también se entienden vulneradas en la forma como el Estado trata a los familiares de víctimas de ciertas violaciones graves de derechos humanos (como por ejemplo la tortura, ejecución extrajudicial o desaparición forzada)¹⁸.

¹⁸ Corte IDH. Caso Aloeboetoe Vs. Surinam. Sentencia de reparaciones de 10 de septiembre de 1993. Serie C. No. 15.

La corte ha considerado que se puede declarar la violación al derecho a la integridad psíquica y moral de familiares directos de víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos aplicando una presunción iuris tantum respecto de madres y padres, hijos, hermanos, cónyuges, compañeros permanentes, siempre que ello responda a las condiciones particulares del caso. En este sentido la Corte ha entendido que se presume que los padres sufran moralmente por la muerte cruel de sus hijos, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona experimente dolor ante el suplicio de su hijo¹⁹.

“Recientemente dicha Corte desarrolló aún más el concepto, resaltando que entre los extremos a ser considerados se encuentran también los siguientes: la proximidad del vínculo familiar, las circunstancias particulares de la relación con la víctima, el grado en el cual el familiar fue testigo de los eventos relacionados con la desaparición, la forma en que el familiar se involucró respecto a los intentos de obtener información sobre la desaparición de la víctima y la respuesta ofrecida por el Estado a las gestiones incoadas”²⁰.

Como se mencionó anteriormente, las víctimas fueron ultimadas de forma cruel y arbitraria, en su hogar mientras se encontraban descansando y uno de los sobrevivientes (JOSÉ DANILO BARRETO) fue testigo directo de los padecimientos de sus seres queridos. Es razonable considerar que los demás

¹⁹ Caso Aloeboete y otros Vs Surinam. Reparaciones y costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993.

²⁰ Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2000, que aparece en Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 10, Integridad Personal, pág. 43. Párrafo 163, La expresión “dicha Corte” se está refiriendo a la Corte Europea de Derechos Humanos, según se desprende de la lectura del párrafo anterior (162) incluido en el Cuadernillo.

miembros de la familia de las víctimas hayan sido afectados en su integridad psíquica y moral después de enterarse de la masacre, tormentos y dolores finales de sus seres queridos.

A lo anterior se suma el conjunto de omisiones por parte del Estado para investigar los hechos y dar con los responsables con el fin de obtener justicia, verdad y reparación. Este acumulado degenera en mayores sufrimientos e intensifica la desconfianza y el sentimiento de inseguridad e impotencia que les causa a los parientes la abstención del Estado para investigar a cabalidad los hechos²¹.

8.6 VIOLACIÓN AL DERECHO DE PROTECCIÓN JUDICIAL (ART. 25 CADH)

Íntimamente relacionado con el artículo 8.1 de la CADH, se encuentra una clara violación al artículo 25 de la CADH el cual define los términos bajo los cuales se deben garantizar, respetar el derecho a la Protección Judicial. El cual establece que:

- 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales*
- 2. Los Estados Partes se comprometen:*
 - a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;*

²¹ Caso Niños de la Calle Vs Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre de 1999.

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. (Organización de los Estados Americanos, 1969)

Esta violación se hace evidente para este caso y lo es más aun cuando se interrelaciona efectivamente con los supuestos de los cuales se establece la violación del artículo 8.1 de la CADH, pues existe un vínculo directo a la afectación de estos derechos, tal como lo establece el Juez A.A CANÇADO TRINDADE en su Voto Razonado para el caso de la Masacre de Pueblo Bello vs Colombia. Quien describe esta relación bajo el supuesto que el debido establecimiento y estructuración de un recurso efectivo que eficazmente logre proteger y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos que lo invocan, consecuentemente logrará brindar todas las garantías judiciales que se pueden ver comprometidas, en los siguientes términos:

“El artículo 8 de la Declaración Universal, y las disposiciones correspondientes en los tratados de derechos humanos vigentes, como el artículo 25 de la Convención Americana, establecen el deber del Estado de proveer recursos internos adecuados y eficaces; siempre he sostenido que dicho deber constituye efectivamente un pilar básico no sólo de tales tratados como del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática, y su aplicación correcta tiene el sentido de perfeccionar la administración de la justicia (material y no sólo formal) en nivel nacional.

20. Además, esta disposición-clave encuéntrase íntimamente vinculada a la obligación general de los Estados, consagrada igualmente en los tratados de derechos humanos, de respetar los derechos en éstos consagrados, y asegurar el libre y pleno ejercicio de los mismos a todas las personas bajo sus respectivas jurisdicciones. Encuéntrase además vinculada a las garantías del debido proceso legal (artículo 8 de la Convención Americana), en la medida en que asegura el acceso a la justicia. De ese modo, mediante la consagración del derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes, de las garantías del debido proceso, y de la obligación general de garantía de los derechos protegidos, la Convención Americana (artículos 25, 8 y 1(1)), y otros tratados de derechos humanos, atribuyen funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes.” (Caso de la masacre de Puerto Bello vs Colombia,. Voto Razonado de A.A CANÇADO TRINDADE , 2006).

Además de lo anterior el Juez CANÇADO TRINDADE señala en su voto razonado que la relevancia de este recurso es mucho más grande de lo que se estableció en un principio, más aún en países de esta región del mundo en donde la violencia y especiales circunstancias de desarrollo social, económico y político ha conllevado a la flagrante violación sistemática de derechos humanos, pues estos recursos propenden por garantizar los derechos humanos y las respectivas garantías del debido proceso. (Caso de la masacre de Puerto Bello vs Colombia,. Voto Razonado de A.A CANÇADO TRINDADE , 2006).

En ese sentido, es evidente que este derecho fue violado en este caso, pues su interrelación con el derecho a las garantías judiciales (Artículo 8.1 de la CADH) es evidente, en el sentido que fueron

múltiples los recursos agotados por el Señor Barreto para acceder al sistema judicial interno, especialmente bajo la y falta de efectividad devenida de los múltiples recursos e instancias agotadas, tal como los derechos de petición (Artículos 23 de la Constitución Política de Colombia) y la Acción de Tutela (Artículo 86 de la Constitución Política de Colombia) del 30 de enero de 2012, interpuestos por la Abogada ANDREA TORRES de la Fundación Nidya Erika, que como se relató anteriormente, veinte años después solo conllevaron a una reasignación y reapertura de la investigación, por parte de la Fiscalía 31 especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario quien recientemente emitió sentencia anticipada en contra del acusado HÉCTOR GERMÁN BUITRAGO RODRÍGUEZ, el cual fue remitido a competencia del Juzgado Único Especializado de Yopal, quien tendrá a cargo la confirmación o no de la sentencia.

8.7 VIOLACIÓN AL DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY (Artículo 243 CADH)

El Derecho de Igualdad ante la Ley ha sido definido por el artículo 24 de la CADH de la siguiente manera (Organización de los Estados Americanos, 1969), *“Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.”*.

Para obtener una definición adecuada de este derecho, se debe hacer un contraste y desglose entre lo consagrado en los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos²²

82. *La Corte reitera que, mientras la obligación general del artículo 1.1 se refiere al deber del Estado de respetar y garantizar “sin discriminación” los derechos*

contenidos en la Convención Americana, el artículo 24 protege el derecho a “igual protección de la ley”. Es decir, el artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación de derecho o de hecho, no sólo en cuanto a los derechos consagrados en dicho tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. En otras palabras, si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional, incumpliría la obligación establecida en el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si, por el contrario, la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana. (Subrayas fuera del texto original)²³

El análisis del caso nos obliga a afirmar que se configura la violación del artículo 24 de la CADH. Este análisis se hace muy en armonía con el Artículo 25 de la misma convención, teniendo en cuenta que el trato igualitario ante la ley impacta de manera directa con las garantías judiciales; al menos en el presente caso por lo que se explica a continuación.

encontramos que a partir del momento de ocurrencia de los hechos la familia Barreto y más específicamente el sobreviviente JOSE DANILO BARRETO pese a haber acudido de manera inmediata a las autoridades garantes de la protección de la población (Policía, Ejército, Alcaldía); no solo no le brindaron ningún tipo de atención incumpliendo de este modo sus deberes, pues en estricto sentido la garantía de este derecho acarrea obligaciones al Estado de hacer, el presente caso es uno en un mar de ejemplos de como pese a que la estructura del Estado Colombiano y el ordenamiento

²³²³ Corte IDH, caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, sentencia de 24 de febrero de 2012, fondo, reparaciones y costas, párr. 82, citada y subrayada por Carlos Rodríguez Mejía, en el dictamen pericial presentado a la Corte Interamericana, Caso Yarce y otras Vs. Colombia, cuya sentencia sobre excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas se emitió el 22 de noviembre de 2016. La audiencia pública e la cual se presentó oralmente se realizó el 26 de junio de 2015 durante el 109º Período Ordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en la ciudad de San José, Costa Rica.

jurídico interno imponen unos deberes específicos a ciertas instituciones que implican la debida diligencia y el deber de protección, entre otros, este último en cabeza de las fuerzas militares que para el caso concreto no brindaron un trato igual con relación a lo que debieron hacer frente a tan grave violación a los derechos humanos, en consecuencia, esta negación permanente de atención no solo configuro un trato desigual sino que dio lugar a otras violaciones de derechos contemplados en la CADH.

Trato desigual es abordado desde los hechos:

- Es el Señor JOSÉ DANILO BARRETO TORRES, acude a las autoridades para reportar lo ocurrido, sin embargo, recibe respuesta negativa de las mismas, por supuesto temor al orden público y por considerar muy alejada la zona.
- Ante la falta de presencia de las autoridades en el lugar de los hechos, es el propio JOSÉ DANILO quien decide levantar los cadáveres de sus seres queridos, ante la amenaza inminente de los autores de desaparecerlos, para lo cual **hace uso de una camioneta prestada por la alcaldía, dado que los funcionarios no se atrevieron a acompañarle**, razón por la cual el Sr. JOSÉ DANILO BARRETO, junto con otro familiar se dirige a la Finca “La Palma”, donde recupera los cadáveres que lamentablemente y por el paso de las horas ya estaban siendo comidos por los cerdos.
- Posteriormente a la masacre, el 4 de octubre de 1990 en horas de la noche, se realizó el velorio de la familia Barreto. Al día siguiente, unidades del Ejército Nacional se llevaron a José Danilo Barreto Torres con el argumento que lo iban a proteger. Primero, fue llevado a la Estación de Policía de Monterrey, donde le tomaron una

declaración hasta las 5 de la tarde. Después fue trasladado en un avión del Batallón Albana, Séptima Brigada de Villavicencio, desconociendo la víctima las razones de este procedimiento, y de los interrogatorios a los que fue sometido, pues ya había sido interrogado tanto en el Juzgado como en la estación de Policía. Esa noche pernoctó en el Batallón y al día siguiente, sobre las nueve de la mañana, fue llamado por el coronel de la Brigada y e interrogado nuevamente. Finalmente, lo regresaron sobre la una de la tarde en un avión de la Fuerza Aérea y lo dejaron en el Juzgado de Monterrey, donde firmò una constancia de “buen trato”. De allí lo llevaron nuevamente a la Estación de Policía donde lo tuvieron durante dos días bajo el mismo argumento de protección. A los pocos días huyó de su pueblo sin previo aviso.

- Del mismo modo la imposibilidad por falta de garantías de seguridad que le impidieron a JOSE DANILO un acceso efectivo a la administración de justicia constituyeron condiciones desiguales que impactaron en términos de verdad y justicia, pero también en términos morales dado que uno de los mayores dolores que JOSÉ DANILO reconoce, tienen que ver con la imposibilidad de hacer justicia y acceder a la verdad en el caso de su familia.

Estos hechos entre otros dan cuenta de cómo el Señor José Danilo fue tratado de forma desigual y de cómo este trato concluyo en la imposibilidad de acceso a verdaderas garantías judiciales.

8.8 VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS- Violación del derecho al desarrollo de la libre personalidad, Integridad personal y vida de los niños.

Ahora bien, resulta plausible, determinante y relevante el exponer como en el caso de la masacre contra la familia Barreto se vieron vulnerados y trasgredidos cruelmente los derechos de los niños a su integridad física, moral y psicológica y aún más relevante, el derecho a la vida, que se constituye como un foco de especial atención a la hora de ser revisado, pues fueron seis las menores víctimas en esta masacre y dentro de los cuales una era una recién nacida de dos meses de edad.

En primer lugar, se debe señalar que El Artículo 19 de la CADH, ha definido *que “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y el Estado”*. Teniendo en cuenta lo dispuesto en este artículo, la CADH reconoce el principio de protección especial a la niñez vigente en el derecho internacional público prácticamente desde sus orígenes y lo consagra normativamente de modo amplio, con lo que queda reservado a la jurisprudencia el fijar sus alcances en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Por ello la Corte ha reconocido aplicables los siguientes instrumentos: La convención Sobre los Derechos del Niño, así como el Protocolo de San Salvador (Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, 2001).

Por su parte la Convención Sobre los Derechos del Niño reza en su artículo 6º lo siguiente:

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.

Al respecto la Corte IDH ha sostenido que cuando los Estados violan los derechos de los niños en situación particular de vulnerabilidad, los hacen víctimas de una doble agresión. En primer lugar, en sentido positivo en tanto aseguramiento de deberes de prestación, los priva de mínimas condiciones de vida (vida digna) y se les impide el “pleno y armonioso desarrollo de su personalidad”, **en otros casos, en sentido negativo, atentan contra su integridad física, psíquica y moral, y hasta con sus propias vidas.**

Por consiguiente, se demuestra la conexidad entre el artículo 19 con el 4 y el 5 de la CADH. Esto anterior, es expuesto en total concordancia con lo referido por la CIDH cuando señaló que *“191. A la luz del artículo 19 de la Convención Americana la Corte debe constatar la especial gravedad que reviste el que pueda atribuirse a un Estado Parte en dicha Convención el cargo de haber aplicado o tolerado en su territorio una práctica sistemática de violencia contra niños en situación de riesgo. Cuando los Estados violan, en esos términos, los derechos de los niños en situación de riesgo, como los “niños de la calle”, los hacen víctimas de una doble agresión. En primer lugar, los Estados no evitan que sean lanzados a la miseria, privándolos así de unas mínimas condiciones de vida digna e impidiéndoles el “pleno y armonioso desarrollo de su personalidad 33, a pesar de que todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que pertenece. En segundo lugar, atentan contra su integridad física, psíquica y moral, y hasta contra su propia vida. 192. Esta Corte ha dicho que “al dar interpretación a un tratado no sólo se toman en cuenta los acuerdos e instrumentos formalmente relacionados con éste (inciso segundo del artículo 31 de la Convención de Viena), sino también el sistema dentro del cual se inscribe (inciso tercero del artículo 31)”34. De conformidad con*

esta postura, la Corte también ha afirmado que, a manera de interpretación autorizada, los Estados miembros han entendido que [la Declaración Americana] contiene y define aquellos derechos humanos esenciales a los que la Carta [de la Organización] se refiere, de manera que no se puede interpretar y aplicar [esta última] en materia de derechos humanos, sin integrar las normas pertinentes en ella con las correspondientes disposiciones de la Declaración”

Es menester indicar que el grado de responsabilidad en los deberes de respetar y garantizar los derechos a la vida y a la integridad física de los niños goza de un carácter especial de protección a la luz del derecho internacional en su conjunto. Atendiendo a esta idea la Corte ha dicho que *“El Estado debe respetar el derecho a la vida de toda persona bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana. Esta obligación presenta modalidades especiales en el caso de los menores de edad, teniendo en cuenta las normas sobre protección a los niños establecidos en la Convención Americana y en la Convención sobre los Derechos del Niño. La condición de garante del Estado con respecto a este derecho le obliga a prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión, a la afectación de aquél”* (Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú, 2004)

Como se ha mencionado anteriormente, 6 de las víctimas mortales de esta masacre fueron niños, inclusive uno de ellos un bebé de brazos. Circunstancias que de acuerdo con la calidad de las víctimas (menores) aumenta la barbarie y el horror de los hechos, y por ende el reproche internacional de este tipo de violaciones debe ser contundente contra el Estado colombiano. El Estado incumplió el deber de protección y respeto a la vida de estos niños. La tolerancia y en muchas ocasiones las alianzas criminales entre agentes del Estado y el grupo paramilitar ACC en la región del Casanare colombiano

permitieron que se cometieran estos espeluznantes hechos sobre la humanidad de estos niños inocentes que para ninguna parte constituían una amenaza.

No obstante, se debe considerar que el Estado está obligado a investigar especialmente los casos en los que las víctimas sean niños a los cuales se les haya privado de la vida; que se castigue a todos los responsables, especialmente cuando están vinculados agentes estatales, ya que, de lo contrario, se estaría propiciando un ambiente de impunidad que aumentaría las posibilidades de que hechos de tal connotación vuelvan a repetirse. Por la experiencia en el Casanare y los altos niveles de impunidad desde los años 90 se infiere razonablemente que se procuraron las condiciones necesarias para que las violaciones de derechos humanos contra adultos y especialmente contra niños se siguieran presentando en los años venideros en la época de mayor violencia paramilitar y estatal en Colombia, cabe resaltar que las Autodefensas Campesinas del Casanare se destacó por reclutar forzosamente a menores.

8.9 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA - Artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en lo sucesivo “Convención sobre la Tortura”)

Continuando con la exposición del conjunto de afectaciones causadas por el estado colombiano, es menester ahora señalar que para este caso se presentó una clara vulneración de la “Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”, pues en el transcurso del acaecimiento de los hechos que rodearon la Masacre de la familia Barreto, se evidenciaron varios actos que se configuran dentro de la modalidad de tortura y por lo tanto, es evidente y plausible endilgar responsabilidad al

estado colombiano, a la luz de las obligaciones establecidas en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Pero antes de continuar es pertinente señalar el sentido de invocar esta Convención se centra en la pertinencia de considerarla como instrumento que facilite el ejercicio interpretativo en consonancia con la CADH, en virtud del principio de derecho internacional general de buena fe (*pacta sunt servanda*) que aplica a los tratados y convenciones internacionales ratificados por los estados y que encuentran su sustento en la multiplicidad de instrumentos que componen el sistema de protección de derechos humanos de la sociedad internacional en su conjunto.

En dicho sentido, es fundamental mencionar que este desarrollo jurisprudencial ha encontrado sustento de manera puntual en lo señalado por la CIDH cuando indica que:

“97. La Corte se ha referido anteriormente a su competencia para aplicar tratados de derechos humanos distintos a la Convención Americana. En este sentido, ha considerado que, si bien tiene amplias facultades para conocer de violaciones a los derechos humanos, éstas últimas deben referirse a los derechos amparados por la Convención, exceptuados los casos en que otro instrumento internacional, ratificado por el Estado, le confiera competencia para conocer de violaciones a los derechos protegidos por ese mismo instrumento. Así, en los casos de los Niños de la Calle vs. Guatemala; Bámaca-Velásquez vs. Guatemala; Cantoral-Benavides vs. Perú; Villagrán Morales y otros vs. Guatemala y Paniagua-Morales y otros vs. Guatemala, la Corte también ha aplicado, además de la Convención Americana, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura o la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas...

“...98. La Corte reafirma el principio de derecho internacional general según el cual los Estados tienen el deber de cumplir de buena fe (pacta sunt servanda) los instrumentos internacionales por ellos ratificados, consagrado en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), así como de abstenerse de realizar actos contrarios al objeto y fin de dichos instrumentos, incluso desde el momento de la firma del tratado, principio éste aplicable en el presente caso. Este último deber, consagrado en el artículo 18 de la referida Convención de Viena, se aplica al Protocolo de San Salvador. Observa la Corte, además, que dicho Protocolo inclusive le otorga competencia a este Tribunal en determinados supuestos”. (Caso Baena-Ricardo y otros vs, Panamá, 2001)

En primera medida, es evidente mencionar que el Estado Colombiano incumplió la Obligación general de prevenir y sancionar la tortura, contemplada en el artículo 1º de la Convención sobre la tortura, por cuanto es evidente que los vejámenes causados a las víctimas de la Familia Barreto se constituyen en Tortura, hecho que nunca fue investigado y sobre el cual a la fecha no se para este caso no ha emitido una sanción efectiva, del mismo modo con relación a la responsabilidad del Estado, la misma se concreta por omisión en el sentido de que no hubo presencia de este para prevenir la comisión del acto en el ejercicio de su deber de garante.

Muy ligado a esta Obligación general., encontramos lo dispuesto en el artículo 6º de la Convención sobre la Tortura, el cual reza que *“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción.*

Los Estados partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad.

Igualmente, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción.” (Organización de los Estados Americanos , 1985)

En dicho sentido, es claro que en la masacre de la familia Barreto no se presentaron ni se tomaron las medidas efectivas para sancionar y prevenir la tortura u otros tratos o penas crueles e inhumanos, pues tal como se señala en la descripción de los hechos anteriormente consignados, el Estado y su institucionalidad brillaron por su ausencia y falta de efectividad para poder investigar, acusar, sancionar y reparar a las víctimas y familiares sobrevivientes de este atroz delito. Cuenta de esto se manifiesta en la latente impunidad en la que se encuentra esta actuación y la falta de apoyo por parte del Estado y sus instituciones a los familiares de las víctimas de esta masacre, como lo son los señores José Danilo Barreto y Luis Eduardo Barreto.

Seguidamente, es también manifiesto que a la luz de lo dispuesto en el artículo 8º de este instrumento, el cual reconoce que *“Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Así mismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal. Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias*

internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado.” (Organización de los Estados Americanos , 1985), también se puede endilgar responsabilidad al estado colombiano por cuanto desconoció sus obligaciones de examinar imparcialmente el caso ya que como se señaló en la parte fáctica, las autoridades locales con deberes de garante, no actuaron por miedo a las represalias en caso de impulsar la investigación o adelantamiento de diligencias como el levantamiento de cadáveres.

Igualmente, se desconoció la obligación de las autoridades correspondientes de proceder oficiosa e inmediatamente ante la respectiva denuncia que dio cuenta de la tortura y posterior homicidio de la familia Barreto por parte de miembros de las Autodefensas Campesinas del Casanare y su respectiva investigación penal la cual hasta el día de hoy se encuentra en el limbo de la incertidumbre por falta de garantías judiciales que puedan darle trámite.

9. PROTECCION JUDICIAL (Artículo 25 CADH)

Expuesto lo anterior, es ahora menester el exponer como el Estado colombiano dentro de los hechos que rodearon todo el desarrollo del caso BARRETO desconoció la obligación **general de investigar las violaciones de los derechos a la vida, la libertad y la integridad** que se constituyen en **graves violaciones a los derechos humanos sufridas por esta familia**. Más allá del respeto y abstención a la violación de derechos, es imperativo que el Estado tome y adopte las medidas necesarias para defender y garantizar los derechos de sus protegidos, tal como lo señala la CIDH en la sentencia del Caso Ximenes Lopes vs Brasil del 2006, cuando dice (CASO XIMENES LOPES VS. BRASIL, 2006):

“103. La Corte reitera que no basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre.”

Derivado del deber general anteriormente descrito, es claro que el mismo se ve comprometido en un mayor grado cuando tiene que ver con el derecho de especial relevancia, tal como el derecho a la vida y a la integridad personal, sin importar las condiciones especiales que puedan limitarlos o ponerlos en riesgo. Esto encuentra sustento en lo señalado por la CIDH, cuando establece que (CASO MASACRES DE EL MOZOTE Y LUGARES ALEDAÑOS VS. EL SALVADOR, 2012): *“148. Los derechos a la vida y a la integridad personal revisten un carácter esencial en la Convención. De conformidad con el artículo 27.2 del referido tratado, esos derechos forman parte del núcleo inderogable, pues no pueden ser suspendidos en casos de guerra, peligro público u otras amenazas.”*

Haciendo énfasis en lo anterior, la corte ha sido clara al establecer la relevancia del derecho a la vida y es especial el deber de los estados de adoptar todas las medidas necesarias encaminadas a proteger, preservar y garantizar el goce de este derecho, de la siguiente manera (Familia Barrios Vs. Venezuela, 2011):

“245. Asimismo, el Tribunal ha establecido que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana, por ser el presupuesto esencial para el ejercicio de

los demás derechos. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. La observancia del artículo 4º., relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida

(Obligación positiva) 262, conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción.”

Complementando lo anteriormente definido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace énfasis en la obligación estatal de prevenir e investigar los actos constitutivos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de manera inmediata y efectiva, en el siguiente (Miguel Castro Castro Vs. Perú, 2006):

246. Respecto de la obligación de garantizar el derecho reconocido en el artículo 5º de la Convención Americana, ésta implica el deber del Estado de prevenir e investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Al respecto, el Tribunal ha señalado que a la luz de la obligación general de garantizar a toda persona bajo su jurisdicción los derechos humanos consagrados en la Convención, establecida en el artículo 1.1 de la misma, de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura.

A la luz de la obligación general de garantizar a toda persona bajo su jurisdicción los derechos humanos consagrados en la Convención, establecida en el artículo 1.1 de la misma, en conjunto con el derecho a la integridad personal conforme al artículo 5°. (Derecho a la Integridad Personal) de dicho tratado, existe la obligación estatal de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura.

Es además claro como para el sistema interamericano es fundamental el proteger y garantizar el derecho a la vida y un trato humano, pues como eje central se exige su acción como garantía, sea de manera positiva como negativa. Lo que para el caso del Señor BARRETO fue determinante y suficiente ver como el Estado en su actuar durante el devenir de los hechos se encargó de incumplir con su deber en los términos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana tal y como lo desarrolla en el caso GELMAN Vs. URUGUAY (Demanda Internacional de la Familia Gelman vs Uruguay, 2010):

96. La Corte Interamericana ha subrayado sistemáticamente el carácter especial de los derechos a la vida y a un trato humano: Los derechos a la vida y a un trato humano son centrales para la Convención [Americana]. De acuerdo con el Artículo 27(2) de dicho tratado, esos derechos forman parte del núcleo no derogable, porque han sido establecidos como derechos que no pueden ser suspendidos en caso de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados parte.

97. Como el derecho a la vida es tan esencial para el ejercicio de todos los demás derechos, el Estado tiene una obligación particular de protegerlo y preservarlo, así como de evitar y sancionar su violación:

Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. El cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4º de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que, además, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva). Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas. En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas necesarias, no sólo a nivel legislativo, administrativo y judicial, mediante la emisión de normas penales y el establecimiento de un sistema de justicia para prevenir, suprimir y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, sino también para prevenir y proteger a los individuos de actos criminales de otros individuos e investigar efectivamente estas situaciones.

Seguidamente, se puede observar la interrelación entre la CADH y la Convención contra la Tortura con respecto al deber de investigar, prevenir, sancionar y tomar todas las medidas necesarias cuando se pueda presentar un presunto caso de tortura, pues se presenta una protección paralela entre estos

dos instrumentos de protección de derechos humanos. Es así como conforme a lo establecido se puede evidenciar el incumplimiento de este deber por parte del estado en el caso BARRETO, pues desde la ocurrencia de los hechos hasta la fecha, el estado no ha adoptado las medidas necesarias para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de la masacre cometida a la familia BARRETO. Es así como establece la Corte que (Demanda Internacional de la Familia Gelman vs Uruguay, 2010):

98. La relación entre la Convención Americana y la Convención contra la Tortura fue establecida por la Corte Interamericana en el Caso Tibi. La Corte señaló que el Estado, al recibir una denuncia de presunta tortura, estaba obligado de oficio a investigar y aplicar las sanciones pertinentes. La Corte determinó que la autoridad de esta obligación de tomar medidas radicaba en los Artículos 5 y 1(1) de la Convención Americana y en los Artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura:

La Corte entiende que, a la luz de la obligación general de los Estados partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5º de la Convención Americana. [...] Esta actuación está normada, además, de manera específica en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura que obligan a los Estados partes a tomar todas las medidas efectivas para prevenir y sancionar todos los actos de tortura dentro del ámbito de su jurisdicción. Desde que entró en vigor en el Ecuador la referida Convención Interamericana contra la Tortura (9 de diciembre de 1999), es

exigible al Estado el cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho tratado. Está probado que, en el lapso transcurrido desde esa fecha, el Estado no ha investigado, juzgado ni sancionado a los responsables de las torturas a las que fue sometida la presunta víctima. Por ello, para la Corte esta conducta constituye una violación de los artículos 5 de la Convención Americana, en relación con el 1.1 de la misma, así como inobservancia de las obligaciones contenidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura.

(Corte I.D.H., *Caso Tibi Vs. Ecuador*. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 159)

Así mismo, siguiendo con la línea jurisprudencial demarcada por la Corte Interamericana respecto a la violación del deber del estado a Investigar, es pertinente rescatar las siguientes construcciones jurisprudenciales realizadas por el TRIBUNAL, en el caso dentro del ordenamiento jurídico colombiano, en la sentencia, en la cual dentro de sus consideraciones se rescatan los conceptos emitidos por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, los cuales establecen que la Responsabilidad por omisión del deber general de investigar se hace presente cuando:

9.1 RESPONSABILIDAD POR OMISIÓN DEL DEBER DE INVESTIGAR

- **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

En Colombia la entidad encargada de investigar delitos es la Fiscalía General de la Nación, en el presente caso ha quedado evidenciado, que la investigación no se inició , ni desarrollado de manera seria, diligente; ni mucho menos en el marco de lo que puede considerarse un “plazo razonable” pues

los hechos datan de 1990, es por eso que este capítulo se dedica a poner en evidencia como las propias instituciones en algún momento han reconocido el incumplimiento de sus deberes por acción y omisión, así:

- a. *El 05 de enero de 2012, mediante Oficio No. 005 F-088 UNDH-DIH, el Fiscal Coordinador de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la ciudad de Villavicencio- Meta, informa a la Jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Dra. MARLENE BARBOSA SEDANO, que:*

*“(…) Concluidas las pesquisas de rigor en aras de ubicar el investigativo relacionado con la muerte de plurales integrantes de la familia Barreto Torres, en hechos acaecidos el 4 de octubre de 1990, en la vereda Banco del Oso de Tauramena, Casanare y, estableciéndose que la misma en la actualidad reposa en la Fiscalía sexta Especializada de Yopal, Casanare, adscrita a la Dirección Seccional de Santa Rosa Viterbo Boyacá, **puede concluir esta delegada, como premisa mayor, que las actividades llevadas cabo en nada se compadecen con la gravedad de los hechos.***

*En primer lugar, las pesquisas se adelantaron solo **respecto de Saúl Torres García a quien el Tribunal Nacional entonces, le precluyó la investigación.***

*Luego se dispuso continuar con el averiguatorio respecto de Tito Julio Fernández y Diego Yesid Sánchez sin que la misma rindiera resultado positivo alguno. **La Fiscalía se inhibió de abrir formal investigación en el año 2002, folio 112.***

*En la actualidad la Fiscalía sexta Especializada de Yopal, Casanare, ha decretado algunas probanzas sin que las mismas se hayan desarrollado a plenitud. **En síntesis, podemos***

sostener que en el caso de marras no ha habido una investigación seria, integral, respecto a los datos que aportó la víctima principal del hecho, el señor José Danilo Barreto Torres, que no es otra que la conducta punible de la organización conocida como autodefensas del Casanare.

Por lo anterior, sin que se hagan necesarias mayores elucubraciones al respecto, dada la transcendencia que el caso amerita y tiene en la actualidad, lo aconsejable, recomendado, es que la investigación la asuma la Unidad Nacional de Derechos Humanos.” ²⁴(Subrayas y negritas fuera del texto)

b. En 2012 la Dra. MARLENE BARBOSA SEDANO jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos DIH, remite oficio dirigido a la Doctora VIVIAN MORALES HOYOS **Fiscal General de la Nación** por medio del cual solicita la variación asignación de investigación, argumentando:

“La fiscalía sexta Delegada ante los Juzgados Especializado de Yopal, Casanare adelantó en su momento la investigación radicada bajo el número 114922, originada por el homicidio de DOLORES TORRES DE BARRETO, CIRO ANTONIO BARRETO TORRES, ORLANDO BARRETO TORRES, GLADIS ENIRA RODRÍGUEZ VARGAS, NINA RODRÍGUEZ VARGAS , FLOR MARÍA VACCA, FLEDIS ENIRA BARRETO RODRÍGUEZ, HEIBER ARIAS TORRES , ARMINTA ROA BARAHONA Y MELQUISEDEC BARRETO TORRES en hechos ocurridos en la vereda Banco de osos, municipio Tauramena (Casanare).

²⁴ Investigación Radicado 8649 – Cuaderno No 4, Folio 9 Fiscalía 31 Unidad de Derechos Humanos y DIH de Villavicencio

Una vez concluida la labor de búsqueda del proceso por parte del Fiscal 88 Especializado de la Unidad de Derechos Humanos de Villavicencio, atendiendo a la solicitud que la Fundación NYDIA ERIKA BAUTISTA en repetidas oportunidades ha dirigido a diferentes oficinas de esta entidad y teniendo en cuenta el eventual trámite ante la comisión interamericana de Derechos Humanos. Se hace necesario que esta unidad asuma el conocimiento y evalúe el contenido de las diligencias encontradas, dada la fecha de los hechos y el estado procesal, que en este caso es de archivo, sin que hasta el momento haya algún tipo de condena conocida. (...)²⁵

En este último oficio, un funcionario de alto nivel como es la Jefe Nacional de la Unidad de Derechos Humanos y DIH, advierte la posibilidad de que este caso sea presentado ante el Sistema Interamericano como una consecuencia natural del incumplimiento al deber de investigar y sancionar que se evidencia después de las inspecciones a las investigaciones, más aun teniendo en cuenta que los presuntos responsables no investigados eran, uno miembro activo del ejército y el otro fungió como alcalde del Municipio de Tauramena para el momento de los hechos.

Anudado a esta consideración remitida por la Fiscalía General de la Nación, se debe de igual forma anexar lo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación dentro de la misma actuación, con respecto a la obligación de Investigar por parte de los funcionarios que representan al estado, más aún en los delicados casos en los cuales se ven comprometidos derechos humanos que pueden ser vulnerados.

²⁵ Investigación Radicado 8649 – Cuaderno No 4, Folio 8, Fiscalía 31 Unidad de Derechos Humanos y DIH de Villavicencio

- **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

La Procuraduría General de la Nación ejerce funciones de control en Colombia, control disciplinario de los funcionarios adscritos al Estado, en este sentido les corresponde también la guarda y promoción de los Derechos Humanos. En el presente caso la Procuraduría evidencio a partir de su intervención en la búsqueda de las investigaciones, la situación de absoluta impunidad en la que se encontraba el caso, así:

a. El 20 de septiembre de 2011 el Personero Municipal de Tauramena, en su condición de agente del ministerio público por comisión de la Procuraduría General de la Nación, a quien se le asigna su intervención especial en la ubicación de las investigaciones derivadas de los hechos de la Masacre de la Familia Barreto.

El personero YIMI LEONARDO ROA HERNÁNDEZ en respuesta a intervención especial deja evidenciado que pese a ser un caso tan grave, inexplicablemente no se encuentra reporte en ninguna de las instituciones así:

“Tauramena- Casanare Septiembre 20 de 2011 “Como agencia del Ministerio Público me corresponde la guarda y promoción de los Derechos Humanos, la preservación del Orden Jurídico y los intereses de la colectividad; por tal razón me dirijo a usted, con el fin que este despacho realizo visita especial al Juzgado Promiscuo Municipal con el objetivo de verificar en los libros de correspondencia o radicadores del año de 1990, sobre las diligencias procedentes del Juzgado

*Promiscuo Municipal de Monterrey que fueron enviadas el 07 de octubre de 1990; **luego de revisados los libros no se encontró radicación alguna o anotación que permitiera inferir que ese despacho judicial se haya radicado el proceso relativo al masacre de la familia Barreto Torres ocurrida el 4 de octubre de 1990: adicionalmente se realizó visita especial a la Alcaldía Municipal de Tauramena donde la funcionaria que atendía la visita manifestó que luego de revisado el software SIGDEP, en la parte inventarios no se encontró la serie actas de consejos de seguridad para la fecha que ocurrieron los hechos y que por ese motivo no se evidencia las acciones que realizó la administración municipal para el caso concreto;** revisados los archivos de la Personería, no se encontró ningún documento que acredite la existencia o conocimiento por parte de este despacho de los hechos ocurridos el 4 de octubre de 1990, en la finca la palma, de la vereda el Banco del Oso”*²⁶(Subrayas y negritas fuera del texto)

b. El 26- de septiembre de 2011, mediante Oficio No. 161, la procuradora 167 judicial penal II se dirige al director Seccional de Fiscalías de Santa Rosa de Viterbo refiriendo:

“Este despacho recibió de la Procuraduría delegada para el Ministerio público en Asuntos Penales, escrito procedente de la Fundación Nydia Erika Bautista, en el que da cuenta de la masacre de miembros de la familia BARRETO TORRES

²⁶ Oficio Fax del 20 de septiembre de 2011 de parte del Personero Municipal de Tauramena a la Procuradora 222 Judicial Penal de Yopal

ocurrida el 4 octubre de 1990, en la finca “La Palma”, vereda Banco del Oso, Monterrey, Casanare, donde perdieron la vida SEIS (6) MENORES que respondían a los nombres de ORLANDO BARRETO TOREES, 16 años; GLADYS ENIRA RODRÍGUEZ VARGAS, 17 años; bebé de DOS (2) MESES DE EDAD hija de GLADYS ENIRA RODRÍGUEZ; FLOR MARÍA VACCA, 15 años; ELEDISENIRA BARRETO RODRÍGUEZ año y medio; HEIBER ARIAS TORRES, 7 años ARAMINTA ROA BARAHONA, 14 años y CUATRO (4) adultos de nombre DOLORES TORRES, 50 años; CIRO ANTONIO BARRETO, 18 años y MELQUISEDEC BARRETO, 26 años y que estos hechos no se ha encontrado investigación en ninguno de los despachos judiciales que por competencia le corresponda adelantar.

Para dar el tramite a la petición, esta procuraduría solicito a la personera de Monterrey, verificar las actuaciones surtidas en los despachos judiciales de esa localidad, sin resultados positivos y se informó que el acta de levantamientos de cadáveres y necropsia realizada a los mismos había sido remitida a Tauramena por competencia se anexan fotocopia libro radicación y planilla de envió.

Con esta información se solicitó el concurso del personero Municipal de Tauramena, quien practico visitas al juzgado de otras dependencias, pero tampoco allí se encontró documentos registrados de haberse tramitado proceso alguno de los hechos.

Como quiera que se ha establecido que no ha cursado investigación alguna por estos hechos en los despachos que por competencia debieron adelantarla, de manera atenta le solicito ordenar a la Fiscalía correspondiente, inicie la investigación penal, en el menor tiempo posible dada la gravedad de estos hechos que vulneran desde todo punto de vista los derechos humanos y que al parecer se hayan en la impunidad.

*Para los efectos pertinentes, anexo en dos copias, el escrito de la Fundación Nydia Erika Bautista, oficios enviados por la Procuraduría a los Personeros Municipales, NECROPSIA REALIZADA A LOS 10 CADÁVERES, DILIGENCIA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVERES y otros”.*²⁷ (Subrayas y negritas fuera del texto)

Con lo anterior, la Procuraduría General de la Nación evidencio que la Fiscalía General de la Nación no había cumplido su deber de investigar estos graves hechos, solicitando ordenar de forma inmediata el inicio de las investigaciones.

10. REPARACIONES

- a) Declárese internacionalmente responsable al Estado Colombiano por la violación, en perjuicio de José Danilo Barreto Torres y la Familia Barreto, de los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a los derechos del niño, previstos en los artículo 4, 5, 8 y 19 de la

²⁷, Oficio No. 161, del 26 de septiembre de 2011. Procuraduría 167 judicial penal II se dirige al Director Seccional de Fiscalías de Santa Rosa de Viterbo Dr. ROBERTH LEÓN CALDERÓN

Convención Americana, en relación con las obligaciones generales de respeto y garantía establecidas en el art. 1.1 y la de adoptar disposiciones de derecho interno prevista en el art. 2 del mismo instrumento.

- b) Como consecuencia de la declaración de responsabilidad internacional, el Estado colombiano debe reparar integralmente todos los perjuicios, tanto materiales como morales, ocasionados a José Danilo Barreto Torres y a la familia Barreto, restablecer los derechos conculcados y, de no ser posible, indemnizarlos y ordenar las medidas de satisfacción y rehabilitación, para anular todas las consecuencias de los hechos ilícitos realizados por el Estado.
- c) Que como consecuencia de la declaración internacional de responsabilidad internacional, el Estado de Colombia realice una investigación imparcial y exhaustiva con el fin de identificar a todos los partícipes en los hechos criminales cometidos contra JOSÉ DANILO BARRETO TORRES y la Familia BARRETO, llevarlos ante las autoridades judiciales para que sean juzgados y, si son hallados responsables, sean sancionados en proporción a la gravedad de los hechos y a su grado de participación en los mismos.
- d) Que, como consecuencia de la declaración de responsabilidad internacional, se ordene al Estado adoptar todas las medidas de carácter legislativo o de otro carácter que sean necesarias para asegurar que hechos como los ocurridos contra JOSÉ DANILO BARRETO TORRES la Familia BARRETO no vuelvan a repetirse.

11. PRUEBAS

Con el fin de sustentar fehacientemente todo lo descrito, analizado y puntualizado anteriormente, se incluyen las siguientes pruebas documentales con el fin que las mismas

sean revisadas y consideradas por este honorable tribunal y así finalmente poder encontrar respeto y garantía a los derechos de Verdad, justicia Y Reparación para el Señor Barreto y su familia.

I) ANEXOS CASO BARRETO

1. Acta de Audiencia de Conciliación Extrajudicial de la Procuraduría 53 Judicial.
2. Registro Civil de Nacimiento de **JOSÉ DANILO BARRETO TORRES**
3. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de **JOSÉ DANILO BARRETO TORRES**
4. Registro Civil de Nacimiento de **LIES EDUARDO BARRETO TORRES**
5. Registro Civil de Nacimiento de **MELQUISEDEC BARRETO TORRES**
6. Registro Civil de Defunción de **MELQUISEDEC BARRETO TORRES**
7. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de **MELQUISEDEC BARRETO TORRES**
8. Registro Civil de Nacimiento de **HENRRY ARIAS TORRES**
9. Registro Civil de Defunción de **HEIBER ARIAS TORRES**
10. Registro Civil de Nacimiento de **GLADIS ENIRA RODRÍGUEZ VARGAS**
11. Registro Civil de Defunción de **GLADIS ENIRA RODRÍGUEZ VARGAS**
12. Registro Civil de Nacimiento de **FLOR MARÍA VACA**
13. Registro Civil de Defunción de **FLOR MARÍA VACA**
14. Registro de Nacimiento de **MARÍA PUREZA VARGAS MORA**
15. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de **MARÍA PUREZA VARGAS DE RODRÍGUEZ**
16. Copia simple del Acta de levantamiento de los cuerpos del 04 de octubre de 1990.

-
17. Copia simple del informe de Necropsia del Ministerio de Salud Servicio Seccional de Salud de Casanare (Yopal).
 18. Declaración **JOSÉ DANILO BARRETO TORRES** el 05 de octubre de 1990 ante la Personería.
 19. Acta de registro de la finca La Palma. Comandante Base Militar, Monterrey. 09 de octubre de 1990.
 20. Diligencia de ampliación de declaración de **JOSÉ DANILO BARRETO TORRES** 26 octubre de 1992. Dirección regional de Fiscalías.
 21. Respuesta Jefe Móvil Monterrey. 05 de junio de 1992. Allí aparece como abandonaron a **JOSÉ DANILO** y sus familiares para que fueran ellos mismos los que tuvieran que recoger los cadáveres.
 22. Resolución inhibitoria bajo la previa radicada No. 1697. Fiscalía 4- Yopal Casanare.
 23. Resolución No. 0263. Variación de la asignación de la investigación. Fiscalía General de la Nación. 13 febrero de 2012.
 24. Concepto posible ejecución por parte de agentes del Estado. Director UNDH - Regional Meta. 12-01-2012. Folio 100 CN. 4. Rad. 8649
 25. Artículo de prensa. El Tiempo.
 26. Declaración REBECA PÁEZ GUERRERO del 27 de marzo de 2012. Ante Fiscalía 31 UNDH.
 27. Declaración MARÍA PUREZA VARGAS DE RODRÍGUEZ del 05 de junio de 2012. Ante la Fiscalía 31 Esp. Villavicencio.
 28. Declaración BENJAMÍN MATEUS QUINTERO el 06 de junio de 2012. Ante la Fiscalía 31 Esp. Villavicencio.

-
- 29.** Indagatoria HÉCTOR JOSÉ BUITRAGO RODRÍGUEZ el 21 de septiembre de 2012. Ante la Fiscalía 31 Esp. Villavicencio.
- 30.** Ampliación Indagatoria HÉCTOR JOSÉ BUITRAGO RODRÍGUEZ el 17 de abril de 2013 ante la Fiscalía 31 Esp. Villavicencio.
- 31.** Formulación de cargos HÉCTOR JOSÉ BUITRAGO RODRÍGUEZ el 30 de abril de 2013 ante la Fiscalía 31 Esp. Villavicencio. Medida de aseguramiento.
- 32.** Audiencia especial en que se declara cerrada la investigación. No. 3958 17 de mayo de 1994. Director regional de fiscalías.
- 33.** Orden de pruebas dirigidas a ubicar a miembros del Ejército. Fiscalía 17. 20 de agosto de 1997.
- 34.** Ampliación de declaración TITO JULIO FERNÁNDEZ CRUZ. ALCALDE. El 26 de marzo de 1998 ante Investigador Judicial José Gustavo Arias López.
- 35.** Informe del Cuerpo Técnico de Investigación -Unidad de Casanare de Yopal del 02 de abril de 1998.
- 36.** Oficio N°2810/DAS.CAS.SI del Departamento Administrativo de Seguridad Seccional de Das Seccional de Inteligencia.
- 37.** Respuesta Comandante Estación de Policía Tauramena.
- 38.** Respuesta del Comandante Base Militar del 03 junio de 1992. Allí reconoce que el ejército tuvo presencia los anteriores días a la masacre.
- 39.** Oficio PERSONERÍA Municipal de Tauramena. 20 septiembre de 2011.
- 40.** Oficio Procuraduría 167 Judicial Penal del 26 de septiembre de 2011. Solicitud de iniciación de investigación penal después de 21 años.
- 41.** Resolución No. 0600120160816488 de 2016. UARIV.

42. Resolución No. 00792 de 2016 Restitución de Tierras.

Del Señor Secretario y, por su intermedio, de los H. Comisionados, con toda atención,

ANDREA TORRES

CARLOS RODRÍGUEZ MEJÍA